



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



TESIS:

**Análisis a la inconstitucionalidad de la ley 31039, en relación al ascenso
automático de trabajadores de la salud**

Autora:

Bach. Palacios Sarmiento Diana Carolina

Asesor:

Mg. Vargas Rodríguez Cesar

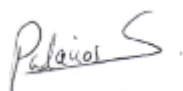
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Fecha de sustentación:

14/09/2023

LAMBAYEQUE, 2023

Tesis denominada: “Análisis a la inconstitucionalidad de la ley 31039, en relación al ascenso automático de trabajadores de la salud” **presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:**



Bach. Palacios Sarmiento Diana Carolina

Autor



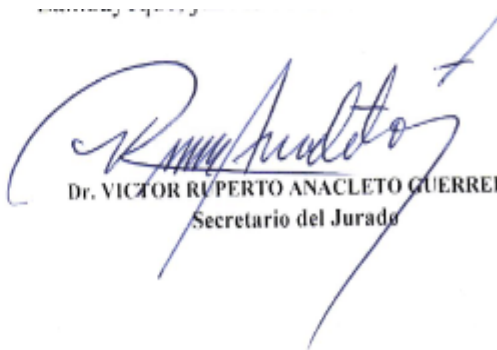
Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

Asesor

APROBADO POR:



Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Presidente del Jurado



Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A mis padres Sara y Wilmer por haberme inculcado con su ejemplo las ganas de estudiar y ser mejor cada día.

Agradecimiento

A Dios

A mis padres por su amor, comprensión y apoyo.

A las buenas amistades que he formado en el transcurso de mi carrera universitaria y en el trabajo.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 46-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Diana Carolina Palacios Sarmiento**.
Siendo las 11:00 a.m. del día jueves 14 de setiembre del 2023 se reunieron en la Sala de sustentaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**ANÁLISIS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 31039, EN RELACIÓN AL ASCENSO AUTOMÁTICO DE TRABAJADORES DE LA SALUD.**", designados por Resolución N° 261-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 12 de setiembre del 2022, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE.
SECRETARIO : Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO.
VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrada por Resolución N°261-2022-FDCP-VIRTUAL de fecha 12 de setiembre del 2022.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°457-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 07 de setiembre del 2023.

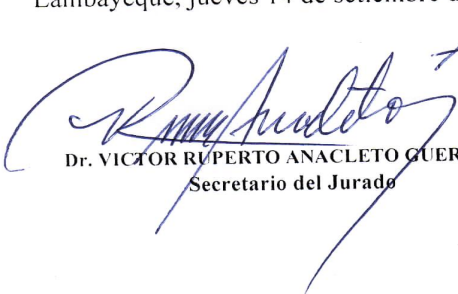
La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Diana Carolina Palacios Sarmiento** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADO con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12:18 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, jueves 14 de setiembre del 2023


Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Presidente del Jurado


Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
Secretario del Jurado


Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis presencial N° 46-2023-UI-FDCP correspondiente a Diana Carolina Palacios Sarmiento, evento que se ha realizado de manera presencial el día jueves 14 de setiembre del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 18 de setiembre del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA


Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

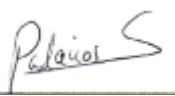
Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Diana Carolina Palacios Sarmiento, Titulada ANÁLISIS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 31039, EN RELACIÓN AL ASCENSO AUTOMÁTICO DE TRABAJADORES DE LA SALUD., luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 10% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 17 de julio del 2023



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I.16484422
ASESOR



Bach. Diana Carolina Palacios Sarmiento
DNI: 75671106
Autor

Análisis a la inconstitucionalidad de la ley 31039, en relación al ascenso automático de trabajadores de la salud

INFORME DE ORIGINALIDAD

10%

INDICE DE SIMILITUD

10%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

2

tc.gob.pe

Fuente de Internet

1%

3

revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

4

idoc.pub

Fuente de Internet

<1%

5

lpderecho.pe

Fuente de Internet

<1%

6

pt.scribd.com

Fuente de Internet

<1%

7

pdfcoffee.com

Fuente de Internet

<1%

8

qdoc.tips

Fuente de Internet

<1%

9

busquedas.elperuano.pe

Fuente de Internet



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

D.N.I.16484422

ASESOR




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Diana Carolina Palacios Sarmiento
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: Análisis a la inconstitucionalidad de la ley 31039, en relación...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_DE_TESIS_1.docx
Tamaño del archivo: 161.96K
Total páginas: 107
Total de palabras: 19,461
Total de caracteres: 106,883
Fecha de entrega: 17-jul.-2023 08:35a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2132570091



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

Análisis a la inconstitucionalidad de la ley 31039, en
relación al ascenso automático de trabajadores de la
salud

ASESOR:
Dr. Vargas Rodríguez Cesar

PRESENTADO POR:
Bach. Palacios Sarmiento Diana Carolina

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

LAMBAYEQUE, 2023

Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I.16484422
ASESOR

Índice de contenido

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice de contenido	v
Índice de tablas	viii
Índice de figuras	ix
Resumen	x
Abstrac	xi
INTRODUCCIÓN	xii
CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS	1
1. Realidad problemática.	2
1.1. Planteamiento del problema.	3
1.2. Formulación del problema.	6
1.3. Justificación e importancia del estudio.	6
1.4. Objetivos.	7
1.4.1. Objetivo General.	7
1.4.2. Objetivos Específicos.	8
1.5. Hipótesis.	8
1.6. Variables.	8
1.6.1. Variable independiente.	8

1.6.2. Variable dependiente.	8
1.6.3. Operacionalización	10
1.7. Diseño de contrastación de hipótesis.	11
1.8. Población y muestra.	11
1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.	11
1.9.1. Métodos.	11
1.9.2. Técnicas.	12
1.9.3. Instrumentos.	12
1.10. Análisis estadísticos de los datos.	12
CAPÍTULO II: MARCO TEORICO.	14
3.1. Pandemia de COVID-19	17
3.2. El derecho fundamental a la Salud como obligación del Estado	19
3.3. Sistema de salud en el Estado peruano	21
3.4. La desprotección del sistema de salud	25
3.5. La constitución como norma principal dentro del ordenamiento peruano	27
3.6. El enfoque del Tribunal Constitucional ante una norma inconstitucional	33
3.7. El Tribunal Constitucional ante la declaración de Inconstitucionalidad de sentencias	35
3.8. Promulgación de la Ley n.º 31039	37
3.9. El personal de salud y la aplicación normativa	38

3.10. La Ley n.º 31039 y el ascenso automático excluyendo el concurso público	39
3.11. La ley n.º 30057 como medio para reforma del servicio civil	42
3.12. La inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039	44
3.13. Supuestos de inconstitucionalidad de una norma	46
3.14. Análisis de la Sentencia 1041/2020, Expediente 00011-2020-PI/TC	54
3.15. Definición de términos	69
CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS	72
3.1. Resultados de la encuesta aplicada a los abogados y jueces de la localidad de Chiclayo	73
CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	79
CAPITULO V: CONCLUSIONES	84
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES	86
REFERENCIAS	88
ANEXO	94

Índice de tablas

Tabla 1	73
Tabla 2	74
Tabla 3	74
Tabla 4	75
Tabla 5	76
Tabla 6	77

Índice de figuras

Figura 1.	73
Figura 2.	74
Figura 3.	75
Figura 4.	76
Figura 5.	77
Figura 6.	78

Resumen

El ascenso automático del personal de la salud a través de la promulgación de la Ley n.º 31039 constituye una circunstancia de inconstitucionalidad, esto se debe a que dicha situación vulnera principios básicos de los concursos públicos institucionales tales como el principio de mérito y capacidad, entre otros de gran importancia. Por otro lado, también impacta negativamente en el presupuesto público asignado a dichas instituciones de tal manera que convalidar los ascensos automáticos conllevaría un grave perjuicio no solo para la institución sino también para la sociedad, puesto que, a través del proceso público en el cual se busca cumplir con la meritocracia, se contrataría a personal que cuente con la mayor capacidad en el ejercicio de las funciones para una mejor atención a la ciudadanía.

En ese sentido, esta investigación ha sido denominada como análisis a la inconstitucionalidad de la ley n.º 31039, en relación al ascenso automático de trabajadores de la salud y busca determinar la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31039, en relación al ascenso automático excepcional de los trabajadores de la salud. Asimismo, se ha llegado a concluir que la inconstitucionalidad de la ley es evidente y como tal no debe permitirse el ascenso automático.

Palabras claves: meritocracia, Ley n.º 31039, ascenso automático, inconstitucionalidad.

Abstrac

The automatic promotion of health personnel through the promulgation of Law 31039 constitutes a circumstance of unconstitutionality, this is because such a situation violates basic principles of institutional public competitions, such as the principle of merit and capability, among others of great importance. Furthermore, it also has a negative impact on the public budget allocated to these institutions in such a way that validating automatic promotions would result in serious harm not only to the institution but also to society. Through a public process aimed at fulfilling meritocracy, hiring personnel with the greatest capability to perform their functions would provide better service to the public.

In this sense, this investigation has been called Analysis of the unconstitutionality of Law 31039, in relation to the automatic promotion of health workers and seeks to determine the unconstitutionality of Law n.º 31039, regarding the exceptional automatic promotion of healthcare workers. Likewise, it has been concluded that the unconstitutionality of the law is evident and as such automatic approval should not be allowed.

Keywords: meritocracy, Law 31039, consent, automatic, unconstitutionality.

INTRODUCCIÓN

El principio de meritocracia es un ente esencial de todo proceso de contratación en el estado, a través de este principio lo que el estado pretende generar es la contratación de personal eficiente y capacitado que pueda desarrollar con éxito las funciones a su cargo, esto es muy importante, ya que, solo el personal más destacado puede ayudar al cumplimiento de los fines institucionales, lo cual finalmente, no solo se traduce en una mejor gestión de la institución, sino también genera un mayor índice de satisfacción en los servicios brindados a la ciudadanía.

La satisfacción de la población dentro de la administración pública es su razón de ser, mucho más cuando se trata de espacios institucionales principales o estrictamente necesarios, tales como el sector salud. Siendo necesario que se respete en estos aspectos el principio de mérito y capacidad.

Por su parte, el ascenso automático no solo contraviene el principio de meritocracia que se exige en la administración pública, sino que impacta gravemente en el presupuesto público. Téngase en consideración que, las instituciones públicas se les asigna un presupuesto estimado para su funcionamiento anual, en ese sentido, el presupuesto anual no ha contemplado este tipo de circunstancia tal como el ascenso automático lo que generaría una afectación a la estabilidad de la economía nacional.

Finalmente, es necesario realizar un análisis adecuado respecto de la figura del ascenso automático con el propósito de mitigar o evitar consecuencias adversas y deficientes que pueden afectar gravemente al correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. Realidad problemática.

El sistema médico que brinda el Estado peruano a través de las instituciones como: el Ministerio de Salud (en adelante MINSA), el Seguro Social (en adelante EsSalud), los servicios médicos brindados por las sanidades de las fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú y de las municipalidades; son servicios que tienen la capacidad de poder resguardar la salud humana, prevenir enfermedades y garantizar una atención integral de salud en el país. Sin embargo, estas entidades muchas veces presentan barreras burocráticas donde no existe una respuesta rápida ante las necesidades de la sociedad, más aún frente a la pandemia de la Covid -19, lo cual ha provocado una transformación radical basándose en las necesidades de oxígeno y de atención médica. Asimismo, la pandemia del Covid -19 es una de las grandes cargas y problemas que ha tenido el sistema de salud a nivel mundial.

Esta nueva enfermedad Covid -19 ha revelado la pésima atención medica que brinda el estado peruano, y ello se debe a distintos factores como por ejemplo, que la mayoría de hospitales son antiguos, carecen de materiales médicos, existen laboratorios pero no son especializados, no cuentan con la infraestructura adecuada, siendo así esta pandemia ha expuesto lo que sabíamos; que la población más abandonada son los ancianos y las personas de bajos recursos, aunado a ello el personal médico se encuentra desprotegido, un ejemplo claro es no haber recibido los equipos de bioseguridad de manera oportuna conllevando a desenlaces fatales .

Por lo tanto, una de las actuales prioridades de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) incluyen infraestructura que pueda detectar,

monitorear y responder a emergencias de salud como Covid-19, pues este tipo de prioridades tiene que generar un impacto con relación a la salud humana. Esta estructura aplicada a través del sistema de salud en donde se fortalece mediante las competencias básicas y el cumplimiento de las recomendaciones de liderazgo, participando de las partes interesadas, acreditación, recopilación de datos, así como el financiamiento de la infraestructura o la atención de la salud, con el fin de estar mejor preparado.

Antes del brote del coronavirus, el Perú planeaba gastar alrededor de 18,5 millones de soles (alrededor de \$ 5,24 mil millones) en salud en el 2020. Esto es 2,2% del PIB, uno de los niveles más reducidos en comparación con otros países de América Latina. Pues bien, durante varias décadas, el gasto público en salud en el Perú ha estado muy por debajo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado por la OMS para destinar a esta área y poder cooperar económicamente ante el desarrollo de la sociedad.

Ante la revitalización de la economía por las medidas brindadas en el aislamiento social, se tiene que buscar las necesidades de la población, para poder cumplir de manera constitucional el derecho de salud que le corresponde a cada persona.

1.1. Planteamiento del problema.

Actualmente el Covid – 19 afectó a nivel mundial. En lo que respecta al gobierno peruano, ha generado consecuencias negativas en todos los ámbitos; sociales, económicos y políticos, poniendo de manifiesto las notables deficiencias en el sistema de salud, tales como la escasez de personal médico o la mala praxis médica.

Es así que frente a este problema el gobierno implementó diferentes métodos con el objetivo de prevenir la transmisión del virus, como, por ejemplo: la imposición de medidas de aislamiento social, distanciamiento, estados de emergencia, sin embargo, pese a ello el número de infectados que se presentan durante los últimos años son más de 4 millones de peruanos, y aproximadamente 2 mil personas fallecidas (MINSA, 2022).

No obstante, para poder salvaguardar la vida de las personas, el Estado durante todo el año 2020 y los primeros meses del 2021 ha publicado normativas que mitigan la propagación del virus, así como también el mejoramiento del sistema de salud y el realce de la economía peruana a través de los nuevos beneficios laborales.

Por su parte, con relación al empleo público, el Estado anunció en el diario El peruano la ley n.º 31039, el 26 de agosto del año 2020, en beneficio del personal de salud el cual venía luchando contra la pandemia, anteponiendo sus vidas para poder salvar las vidas de sus pacientes, con la implementación de la norma, los derechos laborales del personal de salud, estaban sujetos a la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante MTPE), en donde se les otorgaba una estabilidad laboral a través del ascenso automático en el escalafón, dejando de lado los concursos públicos y la meritocracia, con el fin de contratarlos indeterminadamente a los profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo, de este modo se estaría brindando mejores condiciones y oportunidades de permanencia laboral.

Por otra parte, esta ley trata de no ejecutar una discriminación dentro de los derechos laborales médicos, pues involucra a todo el personal médico, técnico y no técnico para que puedan acceder a condiciones de promoción laboral, debido a la configuración del trabajo decente que brindan a los pacientes de Covid-19, es por ello que se requiere que los trabajadores sujetos a un Contrato Administrativo de Servicio (en adelante CAS) pasen a laborar bajo el régimen laboral N.º 728, correspondiéndoles todos los derechos conforme a norma.

A pesar de la ley interpuesta el Tribunal Constitucional, por decisión unánime declara la inconstitucionalidad el miércoles 23 de diciembre del año 2020 a través del Exp. N.º 00011-2020-PI/TC, determinando de que no se debería otorgar los ascensos automáticos a los trabajadores médicos, técnicos y no técnicos que están sujetos a un contrato CAS. Las circunstancias que el Tribunal logra analizar para declarar la inconstitucionalidad, competen en términos generales al desequilibrio que puede efectuar esta ley dentro del presupuesto público, ya que no existiría una buena sostenibilidad financiera dentro del país, pues se analiza que el costo promedio de gasto sería s/ 2 400 millones. (Legis, 2020). Asimismo, los argumentos que se exponen para declarar la inconstitucionalidad tienen como base diversos artículos de la Constitución Política del Perú, los cuales exponen lo siguiente:

- a. Adolece de vicios inconstitucionales
- b. Perjudica la administración de hacienda pública
- c. Aumenta el gasto público
- d. Repercute en el presupuesto anual

- e. Perjudica la política económica
- f. Vulnera el principio de equilibrio presupuestal
- g. E implica un costo económico adicional para EsSalud.

Las razones antes mencionadas han sido analizadas con base en los principios constitucionales, señalando que la ley no abarca la regulación del ascenso automático del personal de salud ni la transición a diferentes líneas de carrera y grupos ocupacionales, entre otros beneficios. Sin embargo, estas iniciativas podrán llevarse a cabo siempre y cuando se cumplan con las normas y principios constitucionales establecidos en la sentencia previamente mencionada. Frente a esta declaración del Tribunal Constitucional se generó diversos debates entre juristas con el fin de determinar si es factible o no declarar la inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039, es por ello que la investigación se aplicó con el fin de analizar si la Ley vulnera derechos constitucionales con relación al ascenso automático excepcional por años de servicio de los trabajadores de salud.

1.2. Formulación del problema.

¿De qué manera se determina que la Ley n.º 31039 es inconstitucional en relación al ascenso automático de los trabajadores de la salud?

1.3. Justificación e importancia del estudio.

Este estudio permitió analizar y determinar si la Ley N.º 31039 es inconstitucional conforme lo planteado en la última sentencia, tomando como referencia la vulneración que se ha presentado en diversos artículos de la constitución tal y como lo especifica el expediente N.º 00011-2020-

PI/TC. Además, con la investigación se determinó cuáles han sido los derechos violentados de los trabajadores frente a la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31039, pues bajo esta declaración se puede observar que muchos de los trabajadores sujetos a un contrato CAS no han logrado la permanencia a pesar de la labor riesgosa que existe dentro de un hospital ante la actual coyuntura.

Sin embargo, viendo del otro lado del problema, la inconstitucionalidad de esta ley conforme lo analiza el expediente genera una sobrevaloración del gasto público entre otros aspectos, los cuales fueron analizados, siendo de gran utilidad para la investigación con el fin de determinar si la declaración de inconstitucionalidad es o no la más correcta frente a esta norma.

Finalmente, esta investigación permite generar más debate de lo existente sobre el tema de la inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039, además se investigó nuevos alcances que se puedan tomar en cuenta para optimizar el desempeño del personal de salud en el cumplimiento de sus obligaciones lo cual a su vez repercute en una mejor atención a la población; es por ello, que se toman en consideración los beneficios y las deficiencias de la normativa, especificando el respeto a las normas y los principios identificados como vulnerados.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

Determinar la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31039, con relación al ascenso automático excepcional de los trabajadores de la salud.

1.4.2. Objetivos Específicos.

- a. Identificar los problemas jurídicos – políticos que dieron lugar a la emisión de la Ley n.º 31039
- b. Describir los lineamientos constitucionales que dieron origen a la inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039
- c. Analizar la figura jurídica del ascenso común y ascenso automático excepcional en la Ley n.º 31039.

1.5. Hipótesis.

Analizando la Sentencia 1041/2020 y los argumentos expuestos, se determina que la Ley n.º 31039 genera vulneración de la Constitución por lo tanto se establece que es inconstitucional en relación al ascenso automático por años de servicio, debido a que presentan vicios, falta de administración de la hacienda pública y el desequilibrio presupuestal.

1.6. Variables.

1.6.1. Variable independiente.

Inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039

1.6.2. Variable dependiente.

Ascenso automático de trabajadores de la salud.

1.6.3. Operacionalización

Variables	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Ítem / Instrumento
V. Independiente	La ley mencionada se considera inconstitucional puesto que afecta los artículos 2, inciso 2), 10, 11, 12, 40, 43, 78, 79, 103 y 118, incisos 3) y 17) de la Constitución política del Perú. Estos artículos establecen que no se puede realizar el ascenso automático del personal de salud entre otros beneficios.	Vulneración de la constitución	Reconocimiento constitucional	Escala de Likert Encuesta
Inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039.		Arbitrariedad en el ejercicio de poder	Violación de derechos	
		Generación de gasto público	Presupuesto equilibrado	
V. Dependiente	Regula el proceso automatizado de ascenso por años de servicio.	Ascenso automático	Nombramiento progresivo	
Ascenso automático de trabajadores de la salud		Personal de salud	Condiciones laborales	
			Estabilidad laboral	

1.7. Diseño de contrastación de hipótesis.

El diseño que se realizó es No experimental transaccional – simple, dado que no se registrarán cambios, se observa solo porque ocurren en la realidad socio jurídica, la recolección de información y datos, pues por medio de este diseño también se logró determinar la realidad social del sistema de salud actual.

1.8. Población y muestra.

Población: La población está formada por jueces y abogados especializados en derecho constitucional y laboral.

Muestra: En el estudio se consideró una muestra específica de la población, en este caso jueces y abogados especializados en derecho laboral y constitucional. Esta muestra se basó en una encuesta que constaba de seis preguntas.

1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.9.1. Métodos.

El Método Inductivo: Parte de lo particular a lo general.

El Método Deductivo: Parte de lo general para llegar a lo particular

1.9.2. Técnicas.

Encuesta. - Se empleó un cuestionario que se administró a magistrados y abogados de la localidad de Chiclayo, con el propósito de recabar sus opiniones sobre la sentencia.

1.9.3. Instrumentos.

Cuestionario. - La herramienta que se utilizó es la técnica de la encuesta y sirvió para recopilar respuestas de los jueces y abogados de la ciudad de Chiclayo, que tendrán una muestra aleatoria.

1.10. Análisis estadísticos de los datos.

La información recopilada mediante herramientas y técnicas de recolección de datos previamente empleadas en relación a noticias o fuentes se incorporará al trabajo de investigación como información importante que contradice esta hipótesis. Los datos recopilados serán presentados en forma de gráficos y tablas estadísticas, con el fin de visualizar las presiones porcentuales expresadas a través de preguntas.

Análisis de la información

Los operadores del derecho, constituidos por jueces y abogados, fueron evaluados en base a la información brindada a través de tablas, resúmenes y gráficos. Un diagnóstico que involucra información sobre un dominio variable, donde se valora y se califica

la hipótesis ante la comprobación del resultado, con el fin de probar de manera parcial y proporcionar la base para preparar un resultado parcial.

Asimismo, el análisis de los datos se empleó para contrastar la hipótesis formulada, logrando acreditar la Ley N° 31039 es de carácter inconstitucional por cuando se vulneran múltiples presupuestos.

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO.

2. Antecedentes del problema.

Beltrán (2013), en su investigación analiza que:

Durante un periodo de más de 10 años aproximadamente se han utilizado prácticas de contratación inconstitucionales en el Perú y peor aún, la estructura del contrato (SNP) fue denegada cuando se cambió de un contrato de gestión a un contrato de trabajo más económico, con la visión de que los empleados contratados se adhieran a los horarios de trabajo y están sujetos a presentaciones constantes sin reconocer ningún beneficio laboral, todo esto debido a restricciones financieras y gastos irrazonables impuestos por el estado.

Fernández (2011), en su investigación, propone:

Ejecutar el modelo de proceso de promoción que requiere la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Servicios además dictar normas que regulen este sistema y promuevan el desarrollo de puestos administrativos para los servidores públicos. Es necesario desarrollar técnicas de impresión dentro de las vacantes mediante la norma que rige el proceso y creando un sistema que conecte los recursos de los trabajadores que, una vez agotado el proceso de convocatoria interna, se pueda invitar a un nivel institucional a participar del proceso de selección, pues estas oportunidades de desarrollo son importantes para poder ejecutar mejor el desarrollo laboral.

García (2019), en su investigación se interpreta que:

En este estudio, la transformación histórica del proceso constitucional ha permitido el desarrollo de nuevas teorías que pueden estimular la interpretación de la Constitución, así como sus mecanismos de control. Una de estas teorías será la propuesta por Bachof sobre las reglas inconstitucionales.

Cacho (2019), en su investigación determina que:

La relación entre el Tribunal Constitucional autónomo y su injerencia política está llegando a su fin; por ello, nuestro máximo intérprete trabaja con instituciones procesales como “Inconstitucionalidad por Omisión” y el “Estado de Cosas Inconstitucionales”, figuras que se hacen desde el sistema autónomo de la Corte Constitucional para primar sobre un verdadero actor político, han de ser concretas o lógicas en la estructura de la reglas necesarias o política general.

Gutiérrez (2014), en su investigación, establece que:

El nombre correcto para este sistema de revisión constitucional es "acción inconstitucional", que puede describirse como un proceso de revisión constitucional que, cuando es lanzado por una de las instituciones reguladas por la CPEUM, tiene como objetivo determinar la constitución o la inconstitucionalidad de una ley gubernamental o acuerdo internacional cuya resolución sea particularmente similar a la SCJN en caso de que se concluya que la ley o acuerdo en disputa es inconstitucional.

Figueroa (2014), en su investigación se interpreta que:

El sistema inconstitucional brinda un análisis de resolución que toma en cuenta el tribunal constitucional, es decir, una referencia sensible y necesaria para los intérpretes de la justicia constitucional. Pues se toma en cuenta que existe una limitación de normas frente a la interpretación del Tribunal Constitucional, por lo que es necesario precisar el diseño y encontrarse conforme a los marcos constitucionales para hacer cumplir la aplicación de la Constitución.

3. Base teórica.

3.1. Pandemia de COVID-19

La pandemia actual de Covid-19 ha causado indudablemente perjuicios y miedo en la población peruana, y ha llevado a que numerosos gobiernos a nivel mundial declaren el estado de emergencia de manera constitucional y adopten medidas como el aislamiento social obligatorio.

Asimismo, esta crisis ambiental-sanitaria ha afectado profundamente todos los aspectos de la existencia. De esta manera, desde que se hizo público el brote de la Covid-19 en la ciudad de Wuhan (China) hasta la fecha se han extendido sus efectos de manera creciente y dramática a nivel social, económico y geopolítico. Se trata de una pandemia de envergadura inédita a escala mundial, con un impacto significativo en el desempeño de los sistemas social, económico y político. Por tanto, el desconocimiento de la naturaleza y evolución del virus que la genera y las medidas que los Estados han adoptado para mitigar sus efectos están generando una nueva racionalidad social (MEF, 2019).

De igual forma se critica la falta de preocupación, que se manifiesta extramuros, por aquellas víctimas del Covid-19 que diariamente fallecen y que, en muchas ocasiones son impedidos de ingresar a un nosocomio, situación que hemos observado mediante distintos medios de comunicación, donde hay ciudadanos que fallecieron en la puerta de los hospitales.

En principio, luego de la declaración del estado de emergencia (que, entre otros, restringe la libertad de tránsito y el derecho de reunión) de manera casi inmediata el Minsa, a través de la Directiva Sanitaria N.º 087-MINSA/2020/DIGESA aprobada mediante Resolución Ministerial N.º 100-2020-MINSA, estableció entre otros, la obligación de cremación de los muertos por Covid-19, salvo en los lugares donde no exista crematorio. Asimismo, la directiva permitió, como apoyo al duelo, el ingreso de 02 familiares directos con un distanciamiento de dos metros lineales para visualizar el cadáver sin contacto directo con este ni con superficies u otros materiales que estuvieran posiblemente contaminados.

Posteriormente, se publicó la Resolución Ministerial N.º 171-2020-MINSA, la cual modificó la citada directiva. La resolución incluyó el procedimiento de bioseguridad en caso de los cadáveres que son hallados fuera de los establecimientos sanitarios, como es el caso de aquellos encontrados en plena vía pública y precisó que estos serán tratados como casos de Covid-19 aun cuando no se hubiera determinado tal diagnóstico, por lo tanto, su cremación no deberá exceder los dos días y la inhumación los cinco días. Así también, la referida directiva fue modificada por las Resoluciones Ministeriales N.º 189 - 2020 - MINSA y 208-2020-MINSA. Esta última

reconoció finalmente, la facultad de decisión que tiene el familiar directo sobre la inhumación o cremación del cadáver de pacientes fallecidos por sospecha o diagnóstico de Covid-19, procedimiento que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas desde la certificación del fallecimiento.

Sin embargo, es notorio que muchas muertes han ocurrido en aislamiento, tanto en sus residencias como en establecimientos sanitarios. En este último caso, los familiares reclaman una atención médica adecuada para los sospechosos de Covid-19 que acuden para ser tratados. También, en otras circunstancias, diversos medios de comunicación han revelado casos donde familiares exigen la entrega del cadáver de su familiar sospechoso o con diagnóstico de Covid-19 debido a la demora en su entrega. Asimismo, se presentan casos donde los cadáveres son apilados sin identificación y otros donde incluso hubo una entrega doble de los restos a sus familiares.

Indiscutiblemente la situación de emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 ha generado que las empresas asuman posiciones respecto a las situaciones de riesgo sanitarias en el marco de la actividad empresarial. Dichos riesgos se caracterizan por ser indeterminados, imprevisibles y en algunos casos, con resultados tardíos. Sin duda alguna, el Covid-19 se ubica dentro de los riesgos ubicuos en el marco del desarrollo empresarial, lo que ha conllevado a que el empleador organice su estructura en concordancia con las medidas dictadas por el Estado.

3.2. El derecho fundamental a la Salud como obligación del Estado

En este apartado se analizó de una forma dinámica y organizativa, el derecho a la salud, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar dicho

derecho, lo cual se logra mediante la implementación de políticas públicas adecuadas. Estas políticas no solo protegen el derecho de los ciudadanos a recibir atención médica, sino que también se ocupan de proteger los derechos del personal de salud y prevenir su vulneración.

Este derecho fundamental está regulado en la Constitución Política del Perú específicamente en su artículo 2. Este derecho es el pilar para el correcto ejercicio de otros derechos de gran importancia para la persona a fin de desenvolverse en la sociedad. Por ejemplo, sin la adecuada defensa de este derecho no podríamos ejercer íntegramente el derecho al libre desarrollo de la persona y su personalidad, tampoco podríamos ejercer el derecho a la libertad de tránsito; por ejemplo, recuérdese que producto de la pandemia decretada en virtud del Covid-19 se declaró el aislamiento social obligatorio, lo que limitó el derecho a la libertad. En ese sentido, se advierte que, la adecuada protección del derecho a la salud impacta en otros derechos como los ya mencionados.

Ahora bien, la eficacia de un derecho no se condice con su estricta regulación normativa; esto es, el respeto y cumplimiento de un derecho no se produce en virtud de su positivación a través de una norma, cual fuera de la que se trate, incluso la constitución; para ello es imprescindible el despliegue de complejas y estructuradas políticas públicas de salud, como la creación de hospitales, postas médicas, compras de equipos de la salud para atención y para el personal, capacitaciones constantes al personal de la salud, contratación de personal idóneo para el ejercicio de la profesión, entre otras.

Precisamente, en este último aspecto se gesta como un factor de protección del derecho a la salud una política adecuada de reconocimiento de los derechos del personal de la salud. Para ello, debe tenerse en cuenta que, frente al no reconocimiento adecuado y proporcionado de los derechos de los trabajadores genera en aquellos desinterés en cuanto al ejercicio oportuno de sus funciones, incluso se ha visto a nivel nacional múltiples marchas realizadas por el personal de la salud a efectos de reclamar un trato adecuado, igualitario y solicitando reconocimiento de sus derechos laborales.

En ese sentido, frente a la tutela de los derechos de los trabajadores del sector salud el Estado infringe seriamente y de forma indirecta el derecho a la salud de los ciudadanos.

Según el reporte Organizaciones médicas miembros de la Confederación Médica Latino Iberoamericana – CONFEMEL actualizada al 6 de julio del 2022, la cifra de médicos fallecidos por covid-19 en Iberoamérica son un total de 4.639 médicos y a nivel nacional se reporta un total de 580 médicos fallecidos por covid-19 información actualizada al 7 de octubre del 2022.

3.3. Sistema de salud en el Estado peruano

En el ámbito nacional el sistema de salud es considerado una red de instituciones, organizaciones, así como recursos financieros, incluidos los relacionados con distintos sectores que a menudo implementan prácticas de atención de la salud. También incluye a todo el personal y todas las actividades que deben realizarse. La clasificación de objetos es una interacción activa y produce características inequívocas, como la

coordinación y definición de acciones. Todos los países tienen un sistema de atención médica nacional.

Sin una organización y un desarrollo moderno del sistema de atención médica nacional, es inviable lograr un nivel adecuado de salud. Esto se debe principalmente a que los propósitos fundamentales de dicho sistema son elevar el bienestar de toda la población, satisfacer las demandas y salvaguardar contra los riesgos económicos derivados de enfermedades y discapacidades. Ya que, por regla general, es muy importante mantener los costos como una enfermedad y las malas consecuencias, lo que es útil y los beneficios como el nivel de ingresos y los recursos para la financiación; los sistemas de salud mayormente requieren lograr lo prometido, es decir que se cumplan las metas brindadas por el sistema de salud, para mejorar la atención a los ciudadanos. En segundo lugar, porque tiene cuatro funciones clave: liderazgo; financiación, a su vez la recaudación; recursos humanos y físicos y prestación de servicios.

El sistema integral médico del estado peruano está bajo el cargo de cinco agencias: el MINSA, que brinda servicios de salud al 60% de la población; EsSalud, que comprende el 30% de la población; FF.AA., la P.N.P. y el sector privado, que brindan servicios médicos para el 10% restante (Recursos Humanos para la Salud desde 2011).

Aunque, la pandemia ha generado un aumento de enfermedades, también se ha podido observar el aumento de los trabajadores sanitarios. Sin embargo, no se observaron grandes diferencias en la densidad de RHS,

con la excepción del número de enfermeras que crecieron y las que no tenían trabajo.

A mediados de abril del 2020 y agosto del 2020, el Perú llegó a incrementar su DRHS de 37,6 a 39,6 por 10 000 habitantes, es decir un incremento relativo de 5,1%. El efecto de la pandemia en el personal estable de MINSA y los gobiernos regionales (régimen laboral del D.L. n.º 276) experimentó una disminución de DRHS de 26,3 a 24,4 x 10 000 trabajadores en un solo mes y se mantuvo con una leve variación hasta el final del periodo analizado. La DRHS del personal contratado bajo modalidad CAS aumentó constantemente de 7,9 a 13 x 10 000 al final de periodo observado. Por su parte a nivel provincial se informó que 68 provincias tenían una DRHS mayores o iguales a 40 x 10 000 habitantes, y 55 provincias (28%) tenían una DRHS menor de 25 x 10 000 habitantes.

Además, durante la última década, se incrementó la necesidad de proveedores de servicios, especialmente médicos especializados debido a la demanda de seguros de salud públicos y pólizas relacionadas.

Sin embargo, todavía existe una distribución geográfica desproporcionada de los trabajadores de la salud; Lima y las zonas de la costa tienen la mayor cantidad, en cambio en las zonas de Piura (9,6), Lambayeque (10,7) y Loreto (10,8) se registran las más bajas (Recursos Humanos en Salud desde 2011). La distinción en la densidad de población, así como las diferencias entre áreas rurales y urbanas, han disminuido gracias a la implementación del plan descentralizado de RHS denominado SERUMS lo

cual genera una mejor distribución de los trabajadores del sector salud en áreas lejanas.

Dicho plan está acompañado de una guía técnica que consta de materiales de referencia, así como un análisis de las mejores prácticas y formas de aplicar políticas de permanencia a largo plazo basadas en consensos de múltiples partes interesadas. Además se han alcanzado otros avances como el desarrollo de un organismo de control a nivel nacional de derechos humanos, la elaboración y ejecución de un plan estratégico integral de derechos humanos que está totalmente financiado y plenamente integrado en el plan de salud pública.

Antes del brote del coronavirus, Perú planeaba gastar un estimado de 18.5 millones de dólares (alrededor de \$ 5.240 millones) en el sector salud para 2020, 2.2% del PBI, encontrándose entre los niveles más reducidos de toda América Latina. El gasto público peruano en salud desde hace décadas está por debajo del 6% del producto interno bruto recomendado por la OMS para ser invertido en al menos este segmento y lejos del promedio del 10,1% de los estados miembros. (OCDE)

Los hospitales generales generalmente carecen del equipo, incluso de los más básicos, no dejando otra opción a los pacientes que comprar fuera del hospital para obtener la atención que necesitan.

Ahora bien, a efectos de entender la deficiencia de estructuración de nuestro sistema de salud resulta importante realizar algunas comparaciones internacionales. Por ejemplo, en Chile, se observa que dispone de uno de los sistemas de atención médica más eficaces en

términos de eficiencia a nivel latinoamericano, tan es así que incluso en tiempos de pandemia logró realizar un despliegue operativo que le permitió controlar rápidamente la propagación del Covid-19, lo que evidencia la eficiencia y una adecuada planificación a nivel institucional.

De igual forma sucede en Colombia, en donde se advierte que, el sistema público de salud ha logrado incrementar sus niveles de eficiencia en la última década, logrando además atención oportuna e idónea, tan es así que incluso se cuenta una asistencia de calidad para los pacientes oncológicos.

De esta forma, es fácil entender que, la existencia de una adecuada política de salud institucional podría permitir en el Estado Peruano la existencia de un sistema de salud íntegro para atender de forma idónea una necesidad fundamental del ser humano, esto es, la salud.

3.4. La desprotección del sistema de salud

La salud es un ente público que opera en un ambiente caótico dividido en dos grandes centros con sus propias redes de hospitales y clínicas que trabajan de la misma manera y no están conectados entre sí.

Existe el Seguro Integral de Salud (SIS), que es administrado por el Minsa a fin de brindar atención médica universal a los peruanos en condiciones vulnerabilidad y pobreza, que suman más de 25 millones de personas aseguradas, información actualizada al 31 de diciembre del 2021.

Asimismo, está el EsSalud que cubre alrededor de 12 millones de personas, entre empleados fijos y jubilados información actualizada al 2 de noviembre del 2022.

La policía y el ejército cuentan con sus propios seguros de salud y hospitales, y distintas ciudades cuentan con centros de salud municipales, como el sistema Metropolitano de Solidaridad (Sisol) en Lima, que cuenta con 26 hospitales, 7 fuera de la ciudad. Lima capital y 11 centros.

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente la desprotección del sector salud genera la infracción y vulneración del derecho a la salud, lo que impacta directamente en los derechos de los ciudadanos. Además de ello, téngase en consideración que, a la actualidad la ciudadanía peruana en su mayor número no cuenta ni siquiera con seguro de cobertura y, aunado a ello, la crisis en el sistema de salud genera de por sí ya una seria lesión al derecho mismo que se comenta.

No cabe duda alguna que, el sistema médico en el país ha sido descuidado y no solo ello, sino que desde larga data se ha venido desplegando políticas públicas de salud deficientes que agravan la situación en la que nos encontramos.

Estos problemas sistemáticos lograron ser advertidos a través del estado de emergencia sanitaria que terminó colapsando al sistema de salud, que, si bien es cierto muchos países sufrieron crisis debido a la ausencia de un antecedente de tal magnitud, también lo es que, la pandemia demostró que el sistema médico peruano es uno de las más deficientes de América Latina.

Dichas deficiencias se deben entre otras razones a la escasez del personal de salud, ello se advierte a nivel nacional en todos los hospitales, asimismo se presenta la falta de recursos tecnológicos como lo es la falta de equipos

médicos, la falta de medicamentos y medicamentos de calidad, entre otros factores que solo agravan la protección del derecho a la salud.

Por otro lado, la desprotección del sistema salud también se correlaciona con la falta de tutela de los derechos laborales del personal de la salud. Téngase presente que, el derecho a la huelga es un derecho constitucionalmente reconocido, el mismo que puede ser acatado por el extenso personal de la salud como ya se ha visto en anteriores oportunidades, el ejercicio de este derecho en ciertas oportunidades ha generado vulneración del derecho a la salud. Empero, el ejercicio de este derecho refleja lo que se viene comentando, la existencia de un sistema de salud deficiente que se ve reflejado a través del ejercicio legítimo del derecho.

De esta manera no resulta difícil entender, que la tutela efectiva de los derechos de los servidores de la salud debe ser tomada como una cuestión de agenda gubernamental y política pública con el fin de garantizar el ejercicio pleno de otros derechos.

3.5. La constitución como norma principal dentro del ordenamiento peruano

Para entender la importancia de la constitución en el funcionamiento jurídico, político y social de un estado, resulta necesario incluso realizar algunas precisiones en cuanto a la evolución del estado mismo y la forma de su gestación (Anacleto Guerrero, 2015).

En ese sentido, al momento en que un grupo de personas decide unirse entre sí conforma y nace una sociedad, a su vez para que haya un adecuado desarrollo de los integrantes dentro del grupo social es necesario definir los límites de actuación social. A través del establecimiento de estos límites se permite garantizar la estabilidad misma de la sociedad conformada, sin embargo, para que ello suceda es necesario delegar el poder que reside en el pueblo a un pequeño grupo seleccionado de la sociedad.

De esta forma los grupos de representación social son aquellos que dirigen a la sociedad misma y el poder que se les delega debe estar regulado a efectos de que no existan abusos de dicho poder.

Conforme evolucionó la sociedad estos derechos fueron incorporados en documentos, en los cuales se dejó constancia de aquellos límites de actuación social; sin embargo, frente a la cantidad de documentos, los cuales pueden estar orientados a diversos aspectos de regulación de la sociedad, fue necesario identificar cual de aquellos resulta ser el más importante para la existencia de la sociedad. De esta manera surge la teoría de las normas y del ordenamiento jurídico.

Identificados los derechos más importantes, estos fueron unificados en un solo documento, a aquel se le denominó Constitución (Chaname & Otros, 2009). Ahora bien, para identificar el lugar de posición de la constitución es necesario recurrir a la teoría de las normas y del ordenamiento jurídico, conforme esta teoría, el ordenamiento jurídico está conformado por el íntegro de las normas existentes que rigen en un determinado espacio

geográfico y político, empero, la importancia de estas normas se rige en virtud de la esencia misma y su vigor para el mantenimiento social. De esta forma, la constitución contiene derechos que son importantes para la sociedad, derechos imprescindibles porque marcan una parte general máxima de actuación de las personas, en esta norma se establecen garantías y preceptos que dirigen el comportamiento de las personas, por ello, la Constitución al ser la norma de mayor importancia está ubicada en el extremo superior de todas las normas (Anacleto Guerrero, 2015).

Incluso ello se puede advertir de forma sencilla y gráfica a través de la pirámide Kelseniana, pues, es Hans Kelsen quien identificó de forma práctica la importancia de la Constitución para la sociedad, de esta forma la ubicó en el punto máximo de su pirámide y sentenció que no puede existir norma de mayor jerarquía.

Ahora bien, como se ha mencionado, la Constitución establece máximas de actuación social, pero no solo ello, también regula máximas de regulación normativa, de tal forma que, todas las normas que existen dentro del ordenamiento jurídico y que obviamente se entienden que se encuentran en un estado de jerarquía inferior a la de la constitución, necesariamente no puede contradecirla y por el contrario debe respetar los cánones o lineamientos que la constitución misma establece.

En el hipotético caso que una norma de menor jerarquía contradiga la máxima norma nos remitimos a la Constitución Política del Perú específicamente en su artículo 51 donde establece la solución frente a dicha situación conflictiva, ese apartado regula el principio de supremacía

de la constitución también llamada de jerarquía, el cual no hace más que reflejar el grado de superioridad que recibe la constitución dentro del ordenamiento jurídico nacional. De esta forma, la aplicación de dicho principio sentencia a la derogación o eliminación de aquella norma de inferior jerarquía que contradice a la constitución a su expulsión automática del ordenamiento. Solo así se puede llegar a garantizar el principio de unidad o coherencia del ordenamiento jurídico el cual dicta que dentro de un estado no pueden existir normas que estén en conflicto entre sí o entre una norma mayor jerarquía.

Por lo expuesto, se puede entender que la constitución política es la norma de máxima jerarquía por antonomasia del ordenamiento jurídico y que recoge dentro de su texto normativo las normas de mayor importancia para la existencia de la sociedad, tales como lo son los derechos fundamentales, derechos constitucionales, políticos, religiosos, económicos, sociales, entre otros.

Los derechos fundamentales son aquellos que son inherentes a la persona por el sencillo hecho de ser persona, esto se correlaciona con el artículo 2 del Código Civil donde expresamente dice que, toda persona es sujeto de derecho en cuanto le favorezca. Es decir, por ser persona le corresponde gozar y ejercer de forma libre todos los derechos que se hayan regulado para aquella. Estos derechos fundamentales están regulados en la Constitución Política del Perú precisamente en el artículo 2, dentro de ellos se encuentra la vida, la salud, la libertad, igualdad entre otros.

Adicionalmente, se debe de tener en cuenta el artículo 1 del mismo texto normativo, donde establece que el fin del estado y de la sociedad es el respeto de la dignidad de la persona humana. Por su parte, a partir del artículo 4 hasta el artículo 206 señalan una serie de derechos no fundamentales, pero sí constitucionales, tienen dicho grado en virtud de su importancia y aplicación extensiva, por ejemplo, el artículo 58 que establece el régimen económico es fundamental para el correcto desarrollo de la sociedad, por lo tanto, es una norma que tiene que gozar de prerrogativa constitucional a efectos de protegerla. Lo mismo sucede con todas aquellas prerrogativas que no se encuentran señaladas en el artículo 2 pero que, no están exentas de importancia.

En relación a ello se puede tomar lo que precisaron Chaname & Otros (2009) donde dijeron; "La Constitución se sujeta en una base gubernamental, herramientas y sentimientos políticos que la alientan a ser indiferente. La idea es amplia, porque cada estado necesariamente debe tener un manual administrativo. (p. 404).

También, podemos tomar en consideración el concepto de Hakansson (2012) donde interpreta que "la Constitución es un tratado limitante del poder que otorga derechos y libertades a los ciudadanos".

Al definir la constitución del estado como una regla básica, es una ley que no solo prescribe ni es solo un canal para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y los poderes del estado, sino también la fuente del estado ciudadanía de esta manera.

Aunque es indudable, no podemos pasar por alto el hecho histórico de que la mayoría de los estados son los precursores en el ámbito constitucional y, por tanto, no encuentran su origen en una Constitución. Además, existen gobiernos como el de Inglaterra, que no requieren tener una norma fundamental única. Pues actualmente, existe una tendencia de los estados a formarse o adaptarse a su propio estilo basado en un alto nivel de organización institucional.

Entonces la Constitución sería la creadora del propio Estado, pero eso debe entenderse solo cuando se trata de organizar las instituciones estatales, no la impulsora de los derechos humanos. Según diversas corrientes ius-naturalistas, el Estado y la Constitución no generan los derechos fundamentales, sino que los reconocen.

El concepto de ley básica se deriva de la perspectiva jurídica de Kelsen. Si bien no estamos de acuerdo con el autor en ciertos puntos que se discutirán más adelante, pero sí cuando decimos que el estado primero necesita la constitución tanto como permite definirla. Esto no quiere decir que esta ley básica descuide la existencia de las leyes estatales, todo lo contrario; es obra de la Carta Magna, reconociendo los derechos humanos y aceptando que la labor encomendada debe seguir más que nunca la ley vigente, su creación; y, por tanto, si no están definidos por su cuerpo normal, no se pueden ignorar.

Existe una concordancia con lo señalado por Bernal (2010) donde señala que, con base en la visión actual de la Constitución, delineando la grandeza del ordenamiento jurídico, define “un conjunto de reglas y principios,

escritas o no, incluyendo los propósitos, usos y limitaciones del poder de gobierno”; dicho de otra manera, como una “regla básica que establece el marco legal para el Estado” (p. 165).

Si bien el concepto de constitución como regla básica del sistema legal es el más amplio y acordado, no comparte ciertos aspectos característicos. Podemos decir lo que Hakansson (2012) describió como una crítica a ella cuando mencionó que:

La Constitución siempre ha tenido dos características: una política, porque quiere limitar el poder, y otra legítima, porque lo hace legalmente, además, toda la constitución no se puede resumir en un número determinado de principios, leyes y cultura como parte de la prohibición constitucional, por otra parte, porque la Constitución surgió en países como el Reino Unido y América del Norte donde las leyes están abiertas y cerradas (p. 74).

3.6. El enfoque del Tribunal Constitucional ante una norma inconstitucional

En la sentencia emitida en el expediente EXP. N.º 014-2003-AI/TC, el máximo intérprete tuvo la posibilidad de anunciar que el proceso constitucional fuera inconstitucional.

Este acto inconstitucional, según los recurrentes, la proclamación de la constitución de 1993 vulnera la Constitución del año 1979, pues este último artículo 307 "declara que no ha perdido su vigencia ni ha dejado de respetar la fuerza ni siempre que sea abolida distinta a la que tenía" por tanto, "tiene

como finalidad que el Tribunal Constitucional declare su constitución y, su inexistencia y vigencia de la Constitución desde 1979".

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado correctamente, pero es necesario precisar dos cuestiones importantes. En primer lugar; "Desde ese punto de vista, la importancia del código de conducta puede ser tanto formal como material, en donde se valida oficialmente cuando su proceso de producción se ajusta a la ley vigente, que determina el desarrollo de esta ley, es decir, es dictada por la autoridad competente de acuerdo con los procedimientos establecidos. Dependiendo de la precisión del material, si su contenido cumple con otros estándares por encima del sistema legal"

Para luego agregar que este requisito de validez, originalmente se hizo para explicar el caso en las disposiciones constitucionales generales, el cual no puede ser aprobado sin lugar a dudas en los casos constitucionales, porque es la máxima ley del ordenamiento jurídico, además ese lugar en la jerárquica no es la única razón que la diferencia de otras normas legales. Estas son las formas y procedimientos para su interpretación, que, como es sabido, constituyen un sistema democrático y constitucional, con base en las normas y reglamentos vigentes".

Es así que se analiza no tomar en cuenta lo que hace mención la corte sobre este punto hasta el último, porque a fin de garantizar invalidez, afirman que la adopción de la constitución no es imprescindible si se implementa la fuerza de ratificación, lo que haría previsiones para reorganizar, pues esto no es válido a menos que, para cualquier enmienda,

sólo queramos la intervención de dicha institución constitucional, las reglas de la reforma, expresadas en el propio principio básico, perderían fuerza.

En segundo lugar, aunque no lo dice, sus quince bases demuestran que será culturalmente válido cuando su esencia esté en consonancia con otras reglas de alto rango. Creo que establecer un punto válido solo corrigiendo las reglas anteriores equivale a poner en peligro cuestiones constitucionales sin apoyo escrito. Además, es absurdo considerar que el equilibrio solo se puede lograr en niveles superiores, y no al revés, en línea con el mismo organismo regulador.

Finalmente, ante ciertos fundamentos señalados por el Tribunal Constitucional, se reconoce que dicha institución había encontrado excusas de que no podía haber nada inconstitucional (o dentro de ella), con base a lo preparado por la Fuerza Constitucional, en consecuencia, este poder no puede ser restringido por restricciones formales o sustantivas, tal como se establece en su fundamento legal. Considerando que tal comportamiento crea un conflicto, porque a partir de este poder, la estructura misma no puede construir los puntos de reconstrucción o los elementos de piedra, lo que conduce a un posible desajuste o imposibilidad de existencia de barreras.

3.7. El Tribunal Constitucional ante la declaración de Inconstitucionalidad de sentencias

Se tiene en conocimiento que hay escritores que avalan la inclusión de las sentencias del máximo intérprete en dar ejemplo como parte del clúster constitucional. Si bien el investigador comparte este requisito, creo que

cualquier fallo de la Corte Constitucional es parte de una prohibición constitucional. Quiere decir, si el mencionado tribunal es el intérprete supremo de la constitución, cada uno de sus fallos representará la interpretación de la constitución y, por tanto, se ha creado una ley constitucional.

Castillo (2015) comparte la misma opinión al afirmar que:

A través de la interpretación de la constitución, el TC crea reglas de rango constitucional, sus fallos que incluyen disposiciones específicas se convierten en fuente de derecho constitucional. La creación de una ley constitucional puede reflejarse en la esencia y estructura de la constitución. Entonces puede crear una ley constitucional concreta y un orden constitucional efectivo (p. 288).

Si bien las declaraciones se incluirán en el Bloque de Constitucionalidad, también pueden causar inconstitucionalidad cuando; o no cumpla con las condiciones establecidas por el mismo tribunal o cuando viole claramente los derechos o principios contenidos en la Constitución.

Como señala Castillo (2015) ello puede suceder cuando la sentencia del Tribunal Constitucional excede sus potestades; cuando la interpretación del Tribunal sea contraria a las disposiciones constitucionales establecidas por los miembros; o cuando en sentencia se realice una interpretación contraria a lo dispuesto en el mismo Procedimiento Básico (p. 290).

El Tribunal Constitucional no comparte este requisito cuando dice que "solo funcionará en los casos en que las decisiones se tomen en casos

constitucionales derivados del Poder Judicial, y no del Tribunal Constitucional, porque es el intérprete supremo del derecho constitucional”, ante los derechos graves o vulnerados (Expediente N.º 2704-2004 – AA/TC).

El investigador no comparte la posición del Tribunal, aunque es el intérprete supremo de la Constitución, sus decisiones no la protegen de errores, creo que la presencia de esta posición significa la ausencia de justicia, lo que solo significaría una decisión - actuar de forma obligatoria sin ningún apoyo o protección.

Por tanto, es posible argumentar que las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional pueden ser contrarias a la Constitución y a su vez, adolecer de la inconstitucionalidad que el Tribunal afirma haber rechazado; pero, dado que el fallo no puede ser objeto de un acto inconstitucional a subsanar, esta decisión permanece en el sistema.

3.8. Promulgación de la Ley n.º 31039

Dentro de los últimos años y, en su mayor parte, esta emergencia sanitaria que se ha presentado a nivel mundial generó un aislamiento social forzado, en el cual se le ha denominado cuarentena provocado por la pandemia Covid-19, ha generado que el Congreso promulgue el 26 de agosto de 2020 la ley n.º 31039 en el diario oficial El Peruano. La ley busca regular el sistema de ascensos automáticos por años de servicio, cambios en el equipo de trabajo, cambios en la línea de trabajo, nombramientos y cambios indefinidos de expertos, técnicos, enfermeras y personal de

administración de salud para obviamente, brindar mejores condiciones en el ámbito laboral al personal.

Otras disposiciones de la Ley n.º 31039, que más han llamado la atención son el establecimiento de ascensos automáticos (ascensos y traslados de puestos) para el mencionado personal que labora en el Minsa, sus dependencias gubernamentales y EsSalud. Por lo tanto, las posteriores líneas abordarán algunas de las armonizaciones de la ley que hemos mencionado, no solo la estructura constitucional y legal del sistema de obras públicas, sino también los requisitos legales establecidos por la Corte Constitucional.

3.9. El personal de salud y la aplicación normativa

No todos los empleados del sector salud están cubiertos por una profesión médica específica, regulada por la Ley n.º 23536 y su reglamento (Decreto Supremo 019-83-PCM). Únicamente los trabajadores del sector salud pertenecen a este sistema (cirujano, farmacéutico, obstetra, enfermero, veterinario que trabaja en salud pública, biología, psicología, nutricionista, ingeniero sanitario y trabajador social). De esta manera se estaría logrando una mejor intervención del sistema de salud ante la atención brindada al paciente.

Por lo tanto, profesionales de la salud, auxiliares de la salud, incluso el personal administrativo menor, no cubren los alcances de la Ley n.º 23536 y a pesar de contar con estructura jurídica propia (Ley n.º 28561 y su reglamento, aprobado por Norma 004-2012-SS), esto no significa que no

es un trabajo o procedimiento específico regulado por la Ley n.º 23536 para los trabajadores del sector salud.

Los trabajadores de la salud y las enfermeras cuentan con el apoyo de los equipos médicos que realizan tareas específicas asignadas a los trabajadores de la salud, según la profesión, los servicios médicos. Además, participan en el cuidado de la salud junto con los profesionales de la salud; y, en cuanto a su labor, coadyuvan en los procedimientos de rehabilitación, prevención y rehabilitación, higiene personal.

Como tal, existe un concepto erróneo respecto al tema de la ley cuestionada, (artículo 1), discriminación inequívoca de empleados con o sin la condición de trabajadores de la salud; aunque regula los ascensos automáticos (artículo 3), pretende hacer la diferencia reportada mencionando a los "trabajadores de salud insalubres", sin siquiera mencionar la Ley n.º 28561 y su reglamento.

3.10. La Ley n.º 31039 y el ascenso automático excluyendo el concurso público

El acceso a los sistemas privados de empleo (salud pública, educación, servicio diplomático y disciplina) está regulado por su reglamento, por lo que sus disposiciones, entre otras cosas, determinan los distintos requisitos para que el personal pueda ingresar, es decir se presentan procedimientos de selección.

Sin embargo, el acceso a este sistema debe lograrse a través de una demanda pública de un sistema de oportunidades igualitario y transparente,

tal como lo establece la Ley n.º 28175, el Marco de la Ley de Empleo Público, la Ley n.º 1023 y otras leyes aplicables, que son aplicaciones para reemplazar a todos los regímenes laborales, ya sean general o particulares del empleo público.

El ascenso, que algunas personas denominan "progreso", además de estar consagrado en tratados internacionales de los derechos humanos: el inciso c) del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional de los Estados Unidos de Derechos Humanos, y de la División Económica, Social y Cultural, analiza el reconocimiento bajo lo plasmado por la Constitución de 1993 y la STC 04331-2008-PA / TC (Establecimiento 8):

El derecho a ser promovido en los mismos términos se fundamenta constitucionalmente en el trabajo y los derechos que se ejerce, entendiéndose como un poder ejecutivo individual (artículo 22) y, en principio, el derecho al tratamiento y la posibilidad de contacto. Este derecho consiste en brindar oportunidades, sin discriminación a los empleados en la misma situación, para lograr un desarrollo profesional en igualdad de condiciones, que contribuya a la realización y desarrollo de la fuerza laboral y un trabajo eficiente.

Se aprecia que el proceso de desarrollo laboral es una técnica importante, pues de acuerdo con los artículos n.º 37 y 39 de la Ley de Servicio Público Iberoamericano, prefieren y fomentan que se ejerzan empleos públicos, así como el crecimiento de estos bajo las diversas competencias, las cuales

tiene que cumplir con las expectativas de superación tanto como sea posible, de acuerdo con las necesidades de las instituciones públicas.

De acuerdo con la constitución de 1993 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, se comprende a la administración del servicio público como un sistema en donde se llega a reconocer el derecho a la promoción y al desarrollo de la carrera profesional en donde se busca que todos tengan igualdad de derechos laborales y no sean actuadas bajo la discriminación.

Asimismo, se comprende que los incentivos acceden a los servicios sociales para poder formar parte de las condiciones equitativas, así como se menciona en la STC 0025-2005-PI / TC. Y, debido a esta práctica legal, STC 00029-2018-PI / TC (fundamento 70) estableciendo que:

Por tanto, considerando la pertinencia de regular los requisitos para el avance de la labor profesional, desde el punto de vista del desarrollo, como ha interpretado esta Corte una de las estructuras de este bien constitucional, así como el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos por parte de la igualdad de condición es validada por la determinación de la ley en disputa no será trabajo administrativo, de acuerdo con los requisitos de la Constitución y el análisis que realiza el colegiado.

Actualmente la Ley n.º 31039, analiza que el personal administrativo tiene que ser personas profesionales, técnicos o enfermeras, que permitan el acceso directo a los servicios públicos, reconocimiento los derechos constitucionales de atención de salud y eliminando todo tipo de

competencia publica estandarizada, pues de esta manera se planificaría mejor de acuerdo a la Ley N.º 276.

3.11. La ley n.º 30057 como medio para reforma del servicio civil

Esto guarda relación con el artículo 1 del D.S. n.º 012-2011-SA establece que los alcances de la Ley n.º 28561 comprenden a:

- i) Técnicos y auxiliares asistenciales de salud que cumplen funciones en distintos servicios como son; en enfermería, obstetricia, farmacia, laboratorio, enfermería y odontología;
- ii) Técnicos y auxiliares médicos asistenciales de salud que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley n.º 28561 hayan trabajado bajo el régimen del Decreto Legislativo n.º 276 y,
- iii) Servidores administrativos que efectúan trabajo asistencial conforme a lo señalado en el anexo a que hace referencia el artículo 2 del Decreto de Urgencia n.º 046-2002.

Por lo tanto, estos lineamientos se siguen conforme la Ley n.º 26842, el Decreto Legislativo n.º 276 y la Ley n.º 28175, así como la Ley n.º 30057, conjuntamente con el sector privado y las normas que le fueren aplicables, esto analiza que las normas y las leyes anteriormente mencionadas comparten sistemas de empleo específicos: profesorado y universitarios, trabajadores de la salud, jueces, fiscales, diplomáticos, servidores de prisiones, militares, policías y personal judicial.

A ello, se agrega las diversas modalidades de contratación, como el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), el de los Gerentes Públicos, el de la contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público (PAC) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como resultado de la convivencia, estos empleados cumplen con diferentes normas, tienen diferentes requisitos "de empleo, estabilidad laboral, despido y disciplina", reciben beneficios desiguales y tienen diferentes responsabilidades que prácticamente provocan desigualdad entre los empleados del Estado, creando así un déficit en el desempeño. servicio público. Para un sector de trabajadores existe "extrema resiliencia" y para el otro sector "bastante flexibilidad". Por lo tanto, sostenemos que el sistema actual dificulta e imposibilita deshacerse de los trabajadores blancos que no son éticos o no éticos, y al mismo tiempo facilita el abuso al considerar las opciones en citas y trabajo". (Bonifaz, 2016, p. 9).

Por ello, es urgente continuar la modificación del empleo público en el marco de la Ley de Función Pública, porque con esta ley perfecta, por supuesto, el objetivo es respetar los órdenes de contabilidad pública de los salarios, mejorar la calidad del servicio y reevaluar el cargo público, a través del trabajo profesional (con verdadera capacidad de gestión) y el progreso en el mismo), dando mejores condiciones a los empleados de manera justa, en función de las prioridades. Y, desde entonces, brindar servicios de calidad y efectivos en beneficio de la población (Abanto, 2017, p. 11).

Este es el objetivo principal de las reformas reguladas por la Ley de Servicio Civil, no la ambigüedad y aleatoriedad de la Ley n.º 31039, que se han paralizado por ausencia de voluntad política y la falta de regulación estatal, así como por la no aceptación del Gobierno.

A tal efecto, ante una solicitud inconstitucional iniciada por el ejecutivo, es posible que la Corte Constitucional emita una sentencia estructurada para proteger el derecho al acceso a los servicios sociales, bajo el Código del Trabajo para todo el diálogo y la cooperación intergubernamental con el fin de su vigencia efectiva” (STC 02018-2015-PA / TC) sobre los derechos fundamentales declarados; que corresponde a la implementación del nuevo sistema de servicio civil en la política general del estado.

3.12. La inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039

Hace referencia a que no debe darse un ingreso directo ni automático en el sector público o privado, ya que se realiza con estricto respeto a la competencia pública, en equivalencia de situaciones, ni preferencia y discriminación. Pues solo es suficiente analizar que la Corte Constitucional dictaminó que, a través del derecho a la promoción o ascenso, "se trata de brindar oportunidades sin prejuicios ni discriminación a los empleados en la misma situación. De recibir promociones profesionales por igual, lo que contribuye a la realización y desarrollo del personal y diseño de trabajo eficiente”

Sumado a todo esto, la Ley n.º 31039 vulnera explícitamente las disposiciones fundamentales establecidas en las normas que se aplican a todas las entidades públicas y privadas como, entre otras, la propia

Constitución (artículos 22, 26 y 40), Ley n.º 28175, Ley de Estructura Pública del Empleo (Artículos 5 a 9), Decreto Legislativo n.º 1023 (Artículo IV de su Título Introductorio), Ley n.º 28411, Ley de Procedimiento Presupuestario General del Estado (Pago Adicional) (Tercero), Decisión de Emergencia 016 - 2020 (Artículos 2, 4 y 9), así como los requisitos legales establecidos por el Tribunal Constitucional.

Esta constitución anunciada ha sido analizada de acuerdo a lo que estipula la Carta Magna, debido a que el Poder Ejecutivo interpuso una petición inconstitucional (en 23 páginas) contra la Ley n.º 31039 el 31 de agosto de 2020 analiza una violación del artículo 2 - incisos 2- , 7, 9, 10, 11, 12, 40, 43, 103 y 118 - subsecciones 3 y 17, 78, 79 de la Constitución de 1993; aunque no fueron mencionadas de manera expresa las demás normas, el Tribunal Constitucional así concluyó.

Esta libre decisión del Legislativo, regida por el populismo, señala que la Ley n.º 31039 tuvo como fin la búsqueda de un servicio público profesional, buenas condiciones justamente garantizadas y personal superior, basado en prioridades. Y, por tanto, brindar servicios de administración pública efectivos y eficientes, en beneficio de todos los ciudadanos, especialmente en esta época de crisis sanitaria.

3.13. Supuestos de inconstitucionalidad de una norma

Vicios de la Ley

En general, una ley o reglamento con fuerza legal es inconstitucional porque es inferior a los defectos materiales cuando vulnera la Constitución. Por ejemplo, disposiciones relacionadas con principios constitucionales, garantías institucionales, derechos fundamentales, prohibiciones legislativas, etc. Dicho defecto se describe en el artículo 200 inciso 4) de la Constitución como condición inconstitucional en términos de “fondo”.

Si bien las disposiciones básicas de la Constitución no pasan por el proceso de promulgación de normas legales, sí tienen el propósito de limitar los elementos estándar que pueden incluir actos legislativos, por mucho que vulnere el fondo legal. La presencia de un error sustancial en una acción legislativa no depende de cómo se describa, ni de qué se legitima, sino que es básicamente el "proceso de un caso particular" (Guastini, 2001, p. 81).

Para algunas personas, este tipo de violación de la constitución es siempre "directa", con referencia a la determinación de una limitación de la acción legislativa que se obtiene sobre la base de una violación del texto de la constitución, sin ninguna mediación a ser incorporado (Punset, 1995, p.214). El vicio de esta naturaleza se puede llegar a identificar por sus contradicciones, ya que algunas costumbres comunes constituyen una barrera constitucional.

Esto se debe a que, en algunos casos, la forma en que se debe desarrollar un caso particular no es solo (Constitucional), sino que también puede estar

determinada por la práctica consuetudinaria. Considérese, por ejemplo, el caso del complejo proceso legislativo (artículo 104 de la Constitución). Si la ley adecuada tiene la capacidad de determinar el manejo del asunto, entonces una ley que eluda las circunstancias de la delegación será "material" en contra de esa ley y, como en todos los asuntos de jurisprudencia, normalizada, "indirectamente" es decir contraria a la Constitución (Carpio, 2002, p. 29).

La finalidad de reconocer este tipo de disposiciones constitucionales no tiene otro propósito que advertir contra las diversas formas de coerción que pueden darse por ley. Y eso es lo que, según María Luisa Balaguer, cuando se trata de materia constitucional, "hay que considerar los límites que puede mover un legislador en su calidad de parte de la promulgación de la constitución, porque hay un resumen entre la Constitución y ley. Después de pasar ese ciclo, la legislatura se ha movido más allá de la estructura establecida y esa ley es inconstitucional. (Balaguer, 1999, p.218)

Principio de cooperación entre poderes

Se define como el principio de coordinación, autoayuda y colaboración de funcionarios y agencias gubernamentales independientes, concertación e implementación de políticas públicas y estatales, prevención y resolución de sus diferencias, incluyendo la sociedad civil en el diseño, implementando y supervisando las estrategias, tanto políticas, sistemas y proyectos; dentro de un sistema participativo descentralizado, inclusivo, democrático y no partidista, caracterizado por una sociedad abierta, estable y participativa.

Todo esto con la finalidad de lograr una mejoría dentro de la gobernanza del país, ya que el problema real es que el sistema global resultante opera, en medio de las complejidades de la unidad y diversidad, de manera legal y competente (Cámara, 2017).

El principio de cooperación y el principio de separación de poderes son dos partes iguales, que combinan la unidad y la estabilidad, porque se complementan, aunque se componen de valores diferentes, son fundamentalmente dependientes sobre los objetivos del estado. Al respecto:

Actualmente, vivimos ante un estado democrático constitucional en donde presenta ante un orden definido y coordinado de poderes fundamentales derivados de la Constitución. La división del poder en este evento no se muestra triangular, sino cómo dividir el "poder" entre las diversas instituciones que dan ese poder a la constitución, actuando sobre el mismo equilibrio natural y coherencia (González, 2009, p. 518).

Lo contrario sería que el Estado permanezca en un estado de confusión en el reparto del poder, con el riesgo de que esta idea sea reemplazada por la división en la que el ejecutivo, especialmente el sistema presidencial, representa el poder completo bajo el Poder Judicial. O disolviendo el parlamento y dejando el destino de un estado y un distrito con prioridad en el centralismo capitalino.

El principio de cooperación de poderes resulta en necesario al momento de planificar y ejecutar una reforma institucional. Es necesaria una reforma

institucional en el sistema de justicia por cuanto este sistema resulta ser deficiente para atender las urgencias, emergencias y todo tipo de casos médicos; para ello, se necesita la cooperación del ejecutivo, a través del Minsa, conjuntamente con el legislativo y otras entidades gubernamentales a fin de llevar al cabo la reforma del sistema de salud.

Esto permitiría garantizar no solo el derecho a salud sino también tutelar los derechos laborales del personal del sector salud, quienes desarrollan una imprescindible labor en el ejercicio de sus funciones y con respeto al derecho a la salud.

Administración de la hacienda pública

El término, administración y contabilidad de la hacienda depende del ordenamiento jurídico de ese nombre. Proviene de la primera, porque la frase dio título a las leyes de 1850, 1870 y 1911. De hecho, la Ley de Finanzas y Contabilidad de 1911 representa un ejemplo rápido de la Ley de Presupuesto General de 1977, porque se cambia y sustituye.

Aquí se debe proporcionar una descripción del glosario. En donde se nombra a la Ley de Presupuesto General probablemente porque las cosas que parecen reflejar su nombre, el presupuesto, no deben equipararse con la institución que dice que está regulada por la ley: la administración y contabilidad de la hacienda. Se entiende que esta segunda área es mayor que la presupuestaria (Alcalde, 1991, p. 1590).

La Ley de Presupuesto General de 1977, por escrito, tenía ganas de hacer una reorganización, proporciona resúmenes sobre el contenido de lo que

puede causar en disputa. Se refiere, por lo tanto, a "partes de las disposiciones que rigen la realización de la Auditoría Pública en el artículo dictado por la Ley de 1 de julio de 2010" y el procedimiento legal al respecto. También se dice que esta ley establece y define "los principios generales que rigen la actividad del erario público".

Adicionalmente, es necesario mencionar que es el Poder Ejecutivo quien tiene el principal deber de tutelar la hacienda pública, esto es, el erario público, pues así se advierte del numeral 17 del artículo 118 de la Constitución, el Presidente en su calidad de primer funcionario del estado y representante del Poder Ejecutivo, debe de velar que ninguna ley aprobada, en el legítimo ejercicio de las funciones congresales, infrinja el deber de cuidado respecto de la tutela de los fondos públicos.

Siendo así, se logra advertir la legitimidad que tuvo el Poder Ejecutivo para demandar la inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039 que pretendía el ascenso automático por años de servicio del personal de la salud ante el Tribunal Constitucional vía acción de inconstitucionalidad; por cuanto se advierte que la ley objeto de cuestionamiento omitió valorar de forma adecuada principios que son de estricta aplicación para el avance de la carrera pública y también se infringe la prohibición de incrementar el gasto público.

Presupuesto Nacional

El presupuesto nacional es la cantidad de gastos que se deben enumerar para abordar. Es una cantidad de dinero que indica una actividad específica o la finalización de un proyecto. Generalmente, los presupuestos gubernamentales se preparan para un año.

Es común porque algo es evidente o invisible. La información está accesible para todos en general. El término se usa para describir lo que pertenece a una comunidad o estado, y el punto de vista opuesto es específico.

Este documento detalla la estimación de los desembolsos que el gobierno tiene previsto efectuar y los ingresos que espera percibir durante el transcurso del año. Su elaboración está regulada por ley, por lo que se espera que ningún gobierno la viole. Si bien el estudio es responsable de su ejecución, el presupuesto nacional debe ser aprobado por el Congreso y facultado para enmendarlo si así lo desea.

En términos de operaciones, el segmento de ingresos generalmente consta de tres sectores claramente definidos: fuentes de capital, ingresos corrientes e ingresos iniciales. Los costos, por otro lado, incluyen cosas como inversión, empleo, servicio de la deuda o adquisición reciente. Idealmente, a la hora de preparar un presupuesto, repita la estructura de año para que pueda hacer un análisis entre los diferentes períodos de los diferentes presupuestos que reporta.

Los ingresos destinados al presupuesto provendrán de impuestos, tarifas y otros recursos determinados por la ley tributaria, mientras que los gastos

se usarán en inversiones y servicios que beneficien a la población. Todos aparecerán de la forma más medida y detallada posible.

Una vez que el presupuesto nacional está en vigencia, existen leyes que permiten regular la implementación interina del presupuesto establecido a través de agencias reguladoras (dentro del gobierno, la oposición y / o agencias externas). La finalidad es que los fondos públicos se utilicen para fines autorizados y para corregir legalmente las distorsiones si se verifican.

Gasto público

Es muy importante para los presupuestos gubernamentales a pesar de las dificultades de “conciliar diferentes prioridades políticas mientras existen restricciones políticas y financieras cuando las restricciones económicas eran excesivas” (Cetrangolo, 1996, p. 19). No obstante, se están realizando numerosos intentos para analizar el efecto de las políticas públicas o las estrategias adoptadas para mejorar el respaldo social. La actividad económica del gobierno se refleja en el gasto público, que en muchos aspectos se manifiesta como sus planes económicos y sociales para su presupuesto.

Es así que las políticas analizan y muestran cuales son los objetivos que el estado pretende lograr enfocándose en la estrategia de organización y gobierno para desarrollar aspectos sociales y económicos específicos. Para algunos analistas, las reacciones del gobierno son fundamentalmente públicas y, por tanto, imposibles de clasificar por política social, para otros, esto se aplica en cuanto a áreas específicas de actividad, como educación,

y aspectos básicos para la sociedad, como el tema de la salud (Franco, 1983).

Por lo tanto, no existen estándares establecidos que puedan definir qué constituye gasto público y comunitario; CEPAL (1994) se refiere a la falta de acuerdo sobre los términos para definir el concepto de costos sociales y focalización en las actividades de las autoridades con el objetivo de evaluar los aspectos arbitrarios. Esta distribución, que a menudo cumple con ciertas definiciones presupuestarias, puede excluir programas socialmente efectivos implementados por el gobierno que no son adecuados para el área, como caminos rurales, enfoques de ayuda agrícola. O la educación, por ejemplo, es proporcionada por otras instituciones.

La segunda definición se refiere a las acciones sociales, debidamente denominadas actividades vinculadas con la prestación de servicios primarios a los sectores más necesitados. El consumo social será una manifestación del trabajo social, lo que se conoce como una política para quienes se encuentran en la mejor posición en el mercado, sin brindar las condiciones mínimas de comodidad y protección.

Por otro lado, es necesario mencionar que, en realidad la determinación de un gasto público en nuestro estado solo se concibe como una barrera burocrática que solo culmina por agravar la situación de infracción del derecho a la salud y la negación de los derechos laborales de terceros. Por ejemplo, en el reconocimiento de deudas sociales y derechos laborales siempre se emplea por parte del estado el argumento central de que el pago

inmediato de los derechos laborales terminaría por perjudicar al erario público, sin embargo, ello no resulta ser del todo cierto.

Verbigracia, en el contexto de la pandemia se desplegaron diversos esfuerzos económicos para crear nuevos hospitales o al menos adecuar una infraestructura existente para brindar servicios médicos. Lo que refleja que en realidad se trata de falta de esfuerzo político para iniciar una reforma en el sistema de salud.

3.14. Análisis de la Sentencia 1041/2020, Expediente 00011-2020-PI/TC

Conflicto de la Ley N° 31039 – Delimitación de la controversia

La Sentencia N° 1041/2020 que recae sobre el Expediente N° 011-2020-PI/TC busca analizar si es que la Ley n.° 31039 presenta vicios de inconstitucionalidad, por cuando el Poder Ejecutivo a través de su demanda de acción de inconstitucionalidad contra la referida norma, denuncia la vulneración de los presupuestos constitucionales establecidos en el inciso 10) del artículo 2, el artículo 10, artículo 11, artículo 12, artículo 40, artículo 43, artículos 78 y 79, artículo 103, los incisos 3) y 17) del artículo 118 de la Carta Magna, supuestos de infracción en los que habría incurrido el Poder Legislativo a través de la aprobación de la Ley N° 31039 de fecha 26 de agosto de 2020.

El proceso de inconstitucionalidad

La normativa del Nuevo Código Procesal Constitucional regula el procedimiento de inconstitucionalidad aprobado a través de la Ley n.° 31307, de forma estricta comienza el desarrollo normativo de dicho proceso

en el artículo 97 del referido texto normativo. No obstante, antes de hablar del proceso de inconstitucionalidad es necesario hablar de la acción que se ejercita para la instauración de dicho proceso.

La acción para iniciar el proceso de inconstitucionalidad no está regulada en el código procesal constitucional, sino en la Constitución Política del año 1993. El artículo 200 de la Constitución, ubicado sistemáticamente en el Título V denominado Garantías Constitucionales, regula a la acción de inconstitucionalidad como una garantía constitucional. Las garantías constitucionales son mecanismos constitucionales a través de los cuales se pretende el restablecimiento o tutela de un derecho constitucionalmente protegido.

Las garantías que se regulan en el dispositivo en mención son: i) Acción de habeas corpus, ii) Acción de amparo, iii) Acción de habeas data, iv) acción de inconstitucionalidad, v) acción popular y vi) acción de cumplimiento. Estas acciones pueden ser ejercidas por cualquier persona natural o institucional, por cuanto, lo que persigue a través del ejercicio de estas acciones precisamente la protección de la constitución en virtud de la aplicación del artículo 51 de la referida norma y además de ello persigue la desafectación de un derecho constitucional.

La acción es interpuesta ante el Juez Constitucional, sin embargo, cuando la acción en cuestión resulta de aplicación nacional por cuanto se persigue la tutela de derechos extensibles a toda la comunidad el ente competente resulta ser el Tribunal Constitucional, por cuanto es el único facultado para el ejercicio del control concentrado de una norma y declarar la

inconstitucional de una norma y como tal expulsarla del ordenamiento jurídico.

Ahora bien, a pesar de lo anteriormente expuesto, la acción de inconstitucionalidad puede ser solo atendida por el Tribunal Constitucional, así se advierte de lo establecido en el artículo 97 del Nuevo Código Procesal Constitucional, además de ello, se deja en claro que, solo pueden interponer acción de inconstitucionalidad por quienes se encuentran comprendidos en el artículo 203 de la Constitución, esto es, el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas y cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en caso de norma de ordenanza municipal, la acción de inconstitucionalidad puede ser propuesta por el 1% de los ciudadanos locales. También pueden interponer acción de inconstitucionalidad los presidentes de la región en común acuerdo con el Consejo de Coordinación Regional o en sus defectos los alcaldes y, finalmente, pueden interponer acción de inconstitucionalidad los colegios profesionales en asuntos donde sean estrictamente especializados, constituyéndose como representantes del grupo social que les corresponde.

Una de las características especiales que confluyen dentro del proceso de inconstitucionalidad es la procedencia contra normas con rango de ley, a esta característica es necesario concordarla con que, la acción o declaración de inconstitucionalidad no tiene por objeto la reapertura de procesos fenecidos.

Por otro lado, el proceso de acción inconstitucional presenta una naturaleza erga omnes sobre los efectos interpretativos, al respecto, debemos tener en consideración que el Tribunal Constitucional en el proceso de acción constitucional lo que realiza es un control de convencionalidad en virtud de la aplicación del control concentrado, esto es, analiza si la norma objeto de cuestionamiento vulnera derechos constitucionales y, de ser el caso, decide por expulsarla del ordenamiento jurídico. Esto no solo trae implicaciones para la norma en particular, sino en realidad para todo el ordenamiento jurídico; por cuanto, lo que se comunica a través de la sentencia declarativa de la inconstitucionalidad es una serie de principios, derechos y procedimientos que deben ser respetados al momento de la elaboración y emisión de una norma, para que de esta forma, al entrar una norma en vigencia no fragmente derecho y como tal no vulnere los principios de unidad de normas y el principio de supremacía de la constitución. (Figuerola, 2013)

Además de ello, cabe destacar que, toda acción presenta un plazo prescriptorio y la acción de inconstitucionalidad no es la acción, pues el artículo 99 del Código Procesal Constitucional establece que la demanda de inconstitucionalidad solo podrá interponerse dentro del plazo de seis años, el computo del plazo inicia a partir del día siguiente de la publicación de la norma, esto es, se computa a partir de la vigencia de la misma. Sin embargo, una vez haya prescrito la acción, aún quedarán vigentes el contenido del artículo 51 y el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política.

Esto es, el Tribunal Constitucional puede optar por conocer de oficio la posibilidad de inconstitucionalidad de la norma y, en consecuencia, los magistrados que enfrenten procesos con la aplicación de la norma inconstitucional, podrán aplicar el control difuso para poder excluir de aplicación concreta la norma cuestionada.

Respecto de la prohibición a los congresistas de crear o aumentar el gasto público

El fundamento 33 de la referida sentencia establece que es necesario analizar si la Ley n.º 31039 vulnera el presupuesto y la gestión fiscal de los recursos humanos, para ello, es necesario realizar un análisis del principio de equilibrio y la estabilidad presupuestaria.

La Constitución, en lo que respecta a materia presupuestaria, establece todos aquellos principios que son de imperativo cumplimiento a la actuación institucional al poder ejecutivo, legislativo y judicial, sobre quienes reposan facultades sobre la aprobación del presupuesto anual.

En ese sentido, es necesario tomar en cuenta lo regulado en el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 1440, donde se regulan los principios presupuestarios, siendo uno de estos el principio de equilibrio presupuestal conforme se advierte del numeral 1 del artículo 2 de la referida norma.

El principio de equilibrio presupuestal exige que el presupuesto contemple absolutamente todos los gastos e ingresos de forma balanceada de esta forma se garantiza la estabilidad económica y se destinan fondos para

aquellos sectores (de ejecución de políticas públicas) de mayor urgencia y necesidad.

De igual forma, el Tribunal Constitucional ha precisado que el referido principio es fundamental dentro del modelo constitucional económico, ya que permite la distribución adecuada de los fondos públicos a la ejecución de políticas necesarias para satisfacer las demandas más esenciales de la sociedad y, por otro lado, sirve como límite para el gasto del erario público. De mano de ello, resulta necesario precisar que, las leyes de presupuesto en la actualidad contienen montos económicos para la ejecución de obras sociales, culturales y de otra índole, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos y esto es trascendental en nuestro modelo económico, como se ha referido anteriormente.

La importancia del equilibrio presupuestal, se relaciona, como se ha mencionado, con nuestro modelo económico de estado, la Economía Social de Mercado, modelo económico adoptado por el constituyente en el artículo 58 de la Constitución de 1993, prohíbe la participación activa del Estado dentro de las practicas económicas, por lo tanto, los recursos que el estado obtiene son a través de las contribuciones, de ahí la importancia de la existencia de límites de gasto del presupuesto nacional para proteger el erario público y evitar caer en una economía caótica que lo único que generaría es la escasez de los recursos esenciales para el desarrollo social.

Asimismo, el principio de equilibrio presupuestal se encuentra regulado en el artículo 78 de la Constitución, este principio, como se ha detallado, establece una serie de limitaciones frente al gasto de los fondos públicos,

en ese sentido, resulta básico entender que, el gasto de estos recursos debe de están enfocado en la eficiencia de consecución de los deberes y objetivos que la constitución asigna. Esto último tiene estricta relación con el artículo 77 por cuanto este dispositivo en particular establece que el presupuesto debe ser asignado de forma correspondiente a la existencia de los recursos.

Asimismo, en función al control del gasto público, este debe ser entendido como un fin legítimo que pretende asegurar un mayor bien social. Esto es, los órganos que resulten responsables de la planificación, aprobación y ejecución de los fondos públicos deben de actuar siempre bajo estricta responsabilidad en cuanto a la forma del gasto de los fondos públicos.

De esta forma se entiende que, el gasto público es medido y limitado por el principio de equilibrio presupuestal, el cual impone una obligación de adecuado uso y manejo del presupuesto nacional para la destinación de la ejecución de las políticas públicas diseñadas por el ejecutivo y legislativo, así como también el pago de los beneficios sociales que como es de conocimiento público se constituye en uno de los gastos más fuertes que el estado asume de forma anual y que obviamente limita la destinación del presupuesto; por ello, resulta necesario la adecuada distribución del presupuesto que constituye el erario público.

El financiamiento de las compensaciones del personal de la salud

A través de la ley n.º 23536 se reguló el desarrollo del trabajo de la carrera de los profesionales de la salud, esta norma a través de su dispositivo sexto establece que son profesionales de la salud:

- a) Cirujano dentista
- b) Psicólogo
- c) Nutricionista
- d) Ingeniero sanitario
- e) Asistente social
- f) Médico cirujano
- g) Químico farmacéutico
- h) Obstetriz
- i) Enfermero
- j) Médico veterinario
- k) Biólogo

Posteriormente, el artículo 20 señala que “los ascensos se realizan en base a la calificación del personal profesional, experiencia en el desarrollo de las labores, evaluación personal, y la permanencia en el nivel de la carrera que se encuentra al momento de la evaluación para el ascenso. Asimismo, se establece que para ascender al nivel máximo de la carrera se amerita mínimo 20 años en el ejercicio de la función dentro de la administración pública, en este caso en el sector salud.

Por otro lado, a través de la ley n.º 28561 se persigue la tutela en cuanto a la percepción y disfrute de un salario equitativo para los auxiliares y técnicos del sector salud, por cuanto el literal d) del artículo 6 se determina que aquellos tienen derecho a percibir remuneración suficiente y equitativa, la cual será fijada con base a criterios objetivos, como son; la productividad, el desempeño, las responsabilidades que asumen dentro

del ejercicio de su profesión y el nivel académico que goza el trabajador. De igual forma el dispositivo 2 establece que los auxiliares asistenciales y técnicos del sector salud deben tener mayor nivel de eficacia, equidad y eficiencia en función a la tutela de sus derechos laborales, por cuanto desarrollan una función importante dentro del sector salud.

Ahora bien, el personal del sector salud, se encuentra bajo los alcances del Decreto Legislativo n.º 276, el mismo que regula la Ley de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del sector público y su reglamento; y de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento general (D.S. n.º 040-2014-PCM) y de compensaciones Decreto Supremo n.º 138-2014-EF.

A través del tiempo, las normas que regularon los ascensos del personal de la salud, de naturaleza análoga a las normas de la ley objeto de análisis, se contó con la participación bilateral del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República siendo el primero el titular como ente competente para la administración de la hacienda pública.

La función pública y la meritocracia

La meritocracia, en el análisis de la inconstitucionalidad de la ley n.º 31039 es fundamental. Los servidores y funcionarios públicos están al servicio de la sociedad, por ello que, contar con profesionales de calidad dentro de la administración pública no solo es necesario, sino que se constituye en una garantía y obligación que el estado debe de tutelar, puesto que, solo al contar con personal competente que desplieguen funciones públicas importantes para la satisfacción de los intereses

sociales, se podrá tutelar el derecho pretendido, esto es brindar un servicio idóneo.

Ahora bien, el ingreso a la función pública configura un derecho fundamental, cuya regulación se encuentra relacionada al ejercicio de facultades como; a) acceder a la función pública, b) desempeñarla de forma adecuada, c) ascender dentro de la función pública y, d) gozar de igualdad de condiciones en el acceso; así fue establecido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia n.º 025-2005-PI/TC, fundamento jurídico 43.

El derecho fundamental de acceso a la función pública tiene como base esencial el principio de mérito, el cual vincula a su observancia obligatoria por parte de las entidades que conforman el estado.

El principio de mérito presenta dos vertientes interpretativas. Este principio impacta en primer lugar en el acceso a la función pública y, en segundo posición, impacta en la progresión o avance del profesional en el desarrollo de la función pública.

El concurso público de méritos se constituye, bajo este modelo, en una garantía para permitir el acceso a la carrera pública a aquellos profesionales que garanticen que brindarán un servicio eficiente a través del ejercicio de su profesión. La existencia de la meritocracia constituye un indicador de la eficiencia e idoneidad del personal contratado, lo cual impacta directamente en el grado de satisfacción en el servicio brindado a los usuarios.

De esta manera, es necesario precisar lo siguiente, no todas las personas que trabajan en la función pública están incluidas en el ámbito de la carrera administrativa, ello incluso ha sido precisado por el propio Tribunal constitucional a través un análisis convencional, sistemático y teleológico del artículo 39° de la Constitución.

Al legislador democrático le compete regular el ingreso a la carrera administrativa, así como los derechos, obligaciones y deberes que reposarán sobre los servidores públicos. De esta forma, se tiene que es el legislador democrático quien tiene que velar por el cumplimiento estricto y el respeto del principio de meritocracia, por cuanto su respeto pleno impactará de forma positiva en la adecuada prestación de los servicios a la sociedad.

Por lo tanto, el respeto de este derecho se concretiza en primer lugar a través del fortalecimiento de las normas relacionadas con el acceso a la carrera administrativa y, en segundo lugar, con el avance del personal dentro del carrera administrativa, para ello, no solo es necesaria la existencia de un examen riguroso que ponga a prueba al postulante en todas sus facetas, por cuanto meritocracia no solo debe ser entendida como máximo conocimiento de la materia, sino en realidad abarca un conjunto de aspectos del sujeto, tanto como académicas, sociales, emocionales, entre otros aspectos que indican que el sujeto es, dentro de todos los postulantes, el más apto para el ejercicio del cargo.

A parte de ello, también se necesita la existencia de políticas sólidas para el avance en la carrera administrativa, permitiendo así un mayor goce de

los derechos que devengan de la promoción en el puesto, para aquellos que efectivamente tengan la capacidad para ejercer un puesto de mayor jerarquía y esto, también es medible en un aspecto multifacético de la persona a través del cual se evidencian sus capacidades académicas, sociales, emocionales entre otras. Únicamente de esa forma, se garantizará una adecuada protección y cumplimiento al acceso a la carrera administrativa y avance dentro de la misma en función a una mayor satisfacción de las necesidades sociales.

Sobre la inconstitucionalidad del ascenso automático por años de servicio.

Son los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley n.º 31039 los que regulan las reglas para el ascenso automático por años de servicio del personal de la salud en la carrera pública. A efectos de determinar la inconstitucionalidad de las referidas normas es imprescindible tomar en cuenta que, el ascenso del personal de la salud se encuentra regulado desde larga data en la Ley n.º 23536.

Además de ello, es el artículo 40 del D.S n.º 019-83-PCM, el que establece que, los concursos para el ascenso se realizan de forma anual siempre y cuando existan vacantes disponibles, así como también la disponibilidad presupuestal, esto último se alinea con el principio de equilibrio presupuestal, el que dispone que, el estado no debe de hacer un uso excesivo y desproporcionado de los recursos públicos.

En ese sentido, se advierte que, bajo los alcances de dicha ley, los ascensos del personal de la salud solo se realizan por concurso público y

cumpliendo estrictamente con los principios de meritocracia, igualdad y transparencia.

Ahora bien, como se ha advertido inicialmente, para que el ascenso sea factible es necesario que previamente se cuente y se haya identificado el presupuesto para la destinación del pago de las nuevas remuneraciones, por cuanto, ello implica en primer lugar el cumplimiento irrestricto de las obligaciones para la gestación de los ascensos y, en segundo lugar, el deber de tutelar el derecho fundamental de equilibrio presupuestal, el cual como se ha analizado anteriormente, se relaciona con la estabilidad económica del estado que influye en la forma de coexistencia social.

Como se evidencia, el ascenso automático no solo fragmenta el deber de idoneidad por parte de los funcionarios públicos que gestaron la promulgación de la presente ley, además de ello se fragmenta el deber de tutelar el principio de equilibrio presupuestal que limita el gasto público. Sino que también se vulnera el principio de meritocracia.

Como anteriormente se pudo analizar, el principio de meritocracia tiene una doble aplicación, la primera en relación con el acceso a la administración pública y, en segundo lugar, con relación a la progresividad del avance del servidor dentro de la carrera pública, esto es, los ascensos en el desarrollo de la función.

El principio de meritocracia implica de por si un estímulo para los servidores que integran el sistema de salud para acceder a los ascensos. Este estímulo impacta de forma directa en la eficiencia del servidor o funcionario en el desarrollo de sus funciones lo que finalmente genera que

aquel sea un profesional con mayores competencias y capacidades, esto último es esencial pues tiene como objeto permitir que a la administración pública y carrera pública ingresen las personas más aptas para el ejercicio de la función, conllevando un mejor desarrollo de las funciones y esto a su vez impacta en la satisfacción de los usuarios que reciben el servicio que brindan los servidores y funcionarios públicos.

Además de ello, es necesario tener en consideración que la situación económica del estado en la actualidad obliga a tener más cautela en el gasto público, por cuanto la pandemia ha generado efectos e impactos negativos en las economías del mundo, el Estado Peruano no es una excepción, por eso es necesario tener en cuenta de forma muy estricta los límites del gasto público a efectos de no generar gastos indebidos que solo agraven la situación en la que hoy el Estado Peruano se encuentra y, sin lugar a duda, el ascenso automático del personal de la salud, el cual demanda un gasto excesivo para el erario público.

De esta forma se advierte además que, la Ley n.º 31039 excluye presupuestos importantes dentro de la carrera pública como es la valoración de la meritocracia para los ascensos públicos y los efectos que conlleva la aplicación de este principio para el beneficio social, por otro lado, también omite la necesidad de determinar de forma adecuada un presupuesto destinado a cumplir con el derecho de remuneración de los servidores que serían beneficiados de forma indebida con la vigencia de la referida ley, lo cual fragmenta sin lugar a dudas el principio de equilibrio presupuestal, en ese sentido, no cabe duda alguna que la derogación de

la ley objeto de cuestionamiento es un acierto por parte del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, a pesar de ello, no deja de ser cierto que, es imprescindible la gestación de una reforma dentro del sistema de salud a través del cual se permitan sin lugar a duda los ascensos del personal de la salud, pero valorando los presupuestos anteriormente mencionados y que han sido objeto de vulneración con la emisión de la Ley N° 31039.

El derecho a la promoción del empleo con igualdad de condiciones tiene un fundamento constitucional y este relaciona con el derecho de autorrealización de la persona conforme se advierte del contenido del artículo 22 de la Constitución de 1993, asimismo, se relaciona con el principio de oportunidades en el desarrollo de la función laboral conforme se encuentra previsto en el dispositivo 26 del cuerpo normativo constitucional anteriormente mencionado.

Con los derechos anteriormente citados lo que se pretende es brindar un trato libre de discriminaciones a los servidores y funcionarios públicos que presentan situaciones diferentes y de discriminación en el desarrollo de sus funcionarios a pesar de realizar las mismas actividades institucionales, por ejemplo, dentro de estos problemas se presenta la discriminación salarial, lo cual sin lugar a duda fragmenta el derecho a la igualdad previsto en el artículo 2 numeral 2 de la Constitución, por lo tanto, es necesario que en función a una tutela efectiva respecto de estos derecho se viabilice la forma del sistema de salud a efectos de permitir un

avance sustentado en el principio de la meritocracia en el desarrollo de la carrera pública.

3.15. Definición de términos

Acción de Inconstitucionalidad

Es un procedimiento que se presenta por intermedio del Tribunal Constitucional garantizando la jerarquía de la constitución y resuelve conforme estipulan las leyes, las normas y los actos que interpreta el Estado, además la inconstitucionalidad de las normas debe ser confirmada por el Tribunal Constitucional por medio de diversos medios procesales, como recursos y cuestiones infundadas. (DEJ, 2020).

Ascenso automático

Es un proceso que no necesariamente requerirá que tomen el examen para lograr el ascenso mencionado, pero que permitirá cambios de trabajo, nombramientos y reemplazos profesionales por tiempo indefinido, considerando el periodo de tiempo desempeñado y así los puestos deben ser aprobados. Además, se debe registrar en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del Sector Público, aplicativo al mando de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (La Ley, 2020).

Principio de cooperación

Es un supuesto pragmático en donde se intercambian comunicativos, esperando un comportamiento determinado entre locutores, se genera un

acuerdo previo, colaborando con la finalidad de comunicarse, mayormente este principio se busca para guiar una interlocución en la conversación (ELE, 1999).

Hacienda pública

Sección económica del estudio de la actividad financiera en el sector público; es decir, decisiones financieras que reflejan los ingresos y gastos públicos y las relaciones bilaterales. Para las economías de ingresos mixtos, estas decisiones de intervención de las agencias gubernamentales se incluyen como institucionales en el documento presupuestario (Guía Jurídica, 2016).

Gasto público

Es una demostración de la actividad financiera y económica de un país, en términos sencillos es una expresión de su plan económico y social presupuestado a fin de satisfacer la provisión de servicios públicos y llevar a cabo acciones de acuerdo con las funciones y objetivos institucionales.

Equilibrio presupuestal

Es un principio regulatorio basado en el presupuesto del sector público que consta de puntos presupuestarios que representan un equilibrio entre cambios predecibles en los ingresos y recursos atribuidos conforme con las políticas referentes al gasto público y prohíbe la inclusión de poderes no autorizados sin financiamiento. (Artículo I - Balance Presupuestario en el Preliminar de la Ley N ° 28411 Ley del Sistema General de Presupuestos) (MEF, 2016).

CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1. Resultados de la encuesta aplicada a los Jueces y abogados de la ciudad de Chiclayo.

Tabla 1

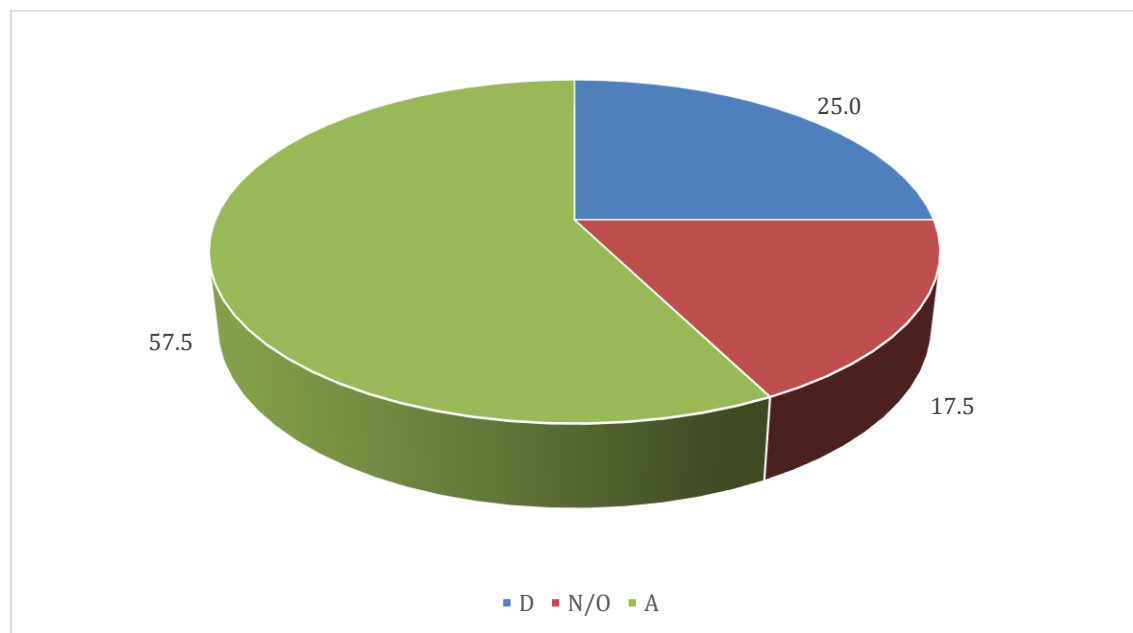
Años de servicio y la meritocracia.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
D	10	25.0
N/O	7	17.5
A	23	57.5
Total	40	100.0

Nota: Encuesta aplicada.

Figura 1.

Años de servicio y la meritocracia.



Nota: Con relación a los datos obtenidos en la encuesta aplicada, se puede asegurar que el 57.5% de los participantes señalan estar de acuerdo en que con los ascensos automáticos por años de servicio se vulnera la meritocracia, sin embargo un 17.5% de los participantes prefieren estar al margen de la pregunta y no dieron su opinión.

Tabla 2

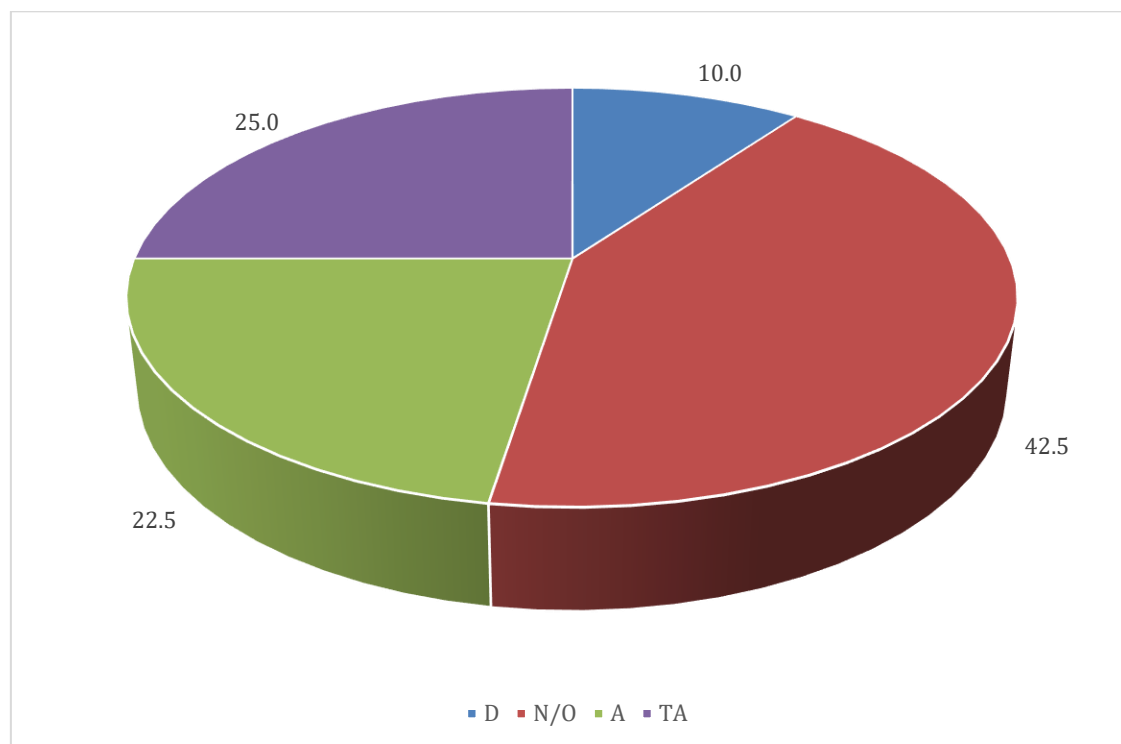
Ascensos automáticos.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
D	4	10.0
N/O	17	42.5
A	9	22.5
TA	10	25.0
Total	40	100.0

Nota: *Encuesta aplicada.*

Figura 2.

Ascensos automáticos.



Nota: Con respecto a la segunda premisa aplicada a los participantes se puede asegurar que el 42.5% de los expertos prefieren no opinar sobre los ascensos automáticos de los trabajadores de la salud si afectarían la calidad del servicio del sector salud brindado a la población, sin embargo, un 10% de los expertos están en desacuerdo con la pregunta aplicada.

Tabla 3

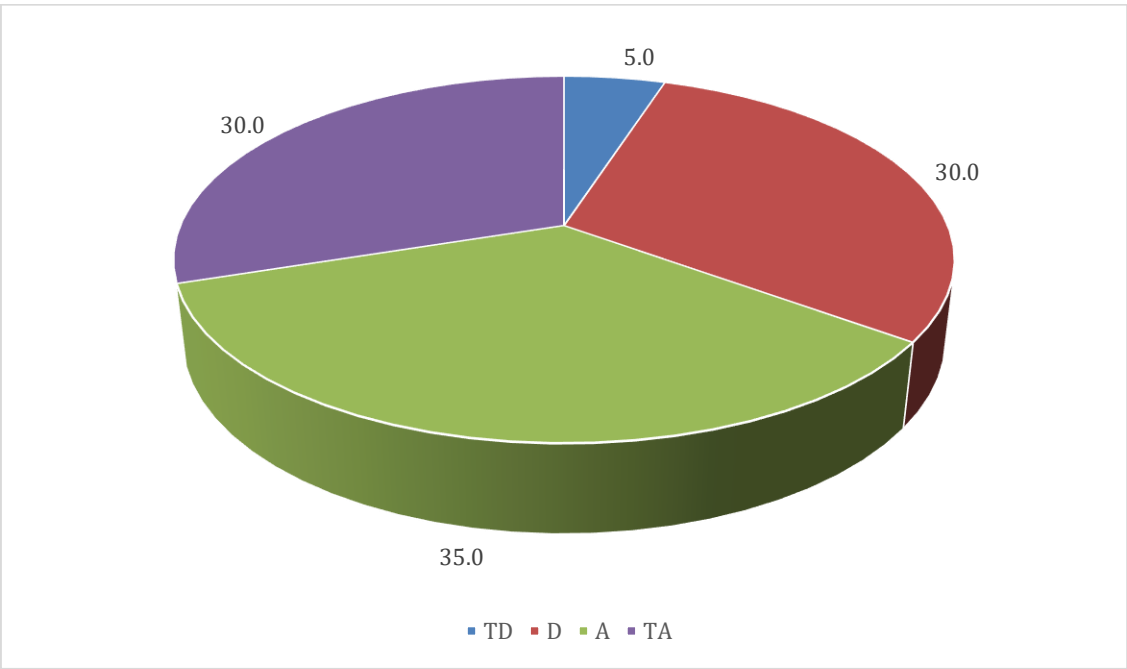
Ley n.° 31039.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	2	5.0
D	12	30.0
A	14	35.0
TA	12	30.0
Total	40	100.0

Nota: Encuesta aplicada.

Figura 3.

Ley n.° 31039.



Nota: Prosiguiendo con la tercera premisa, se puede asegurar que 35% de los expertos que respondieron la encuesta señalan estar de acuerdo en la inconstitucionalidad de la Ley n.° 31039 el cual dispone el ascenso automático excepcional por años de servicio de los trabajadores de la salud, sin embargo un 5.0% de los expertos señalan estar totalmente en desacuerdo con lo establecido en la interrogante.

Tabla 4

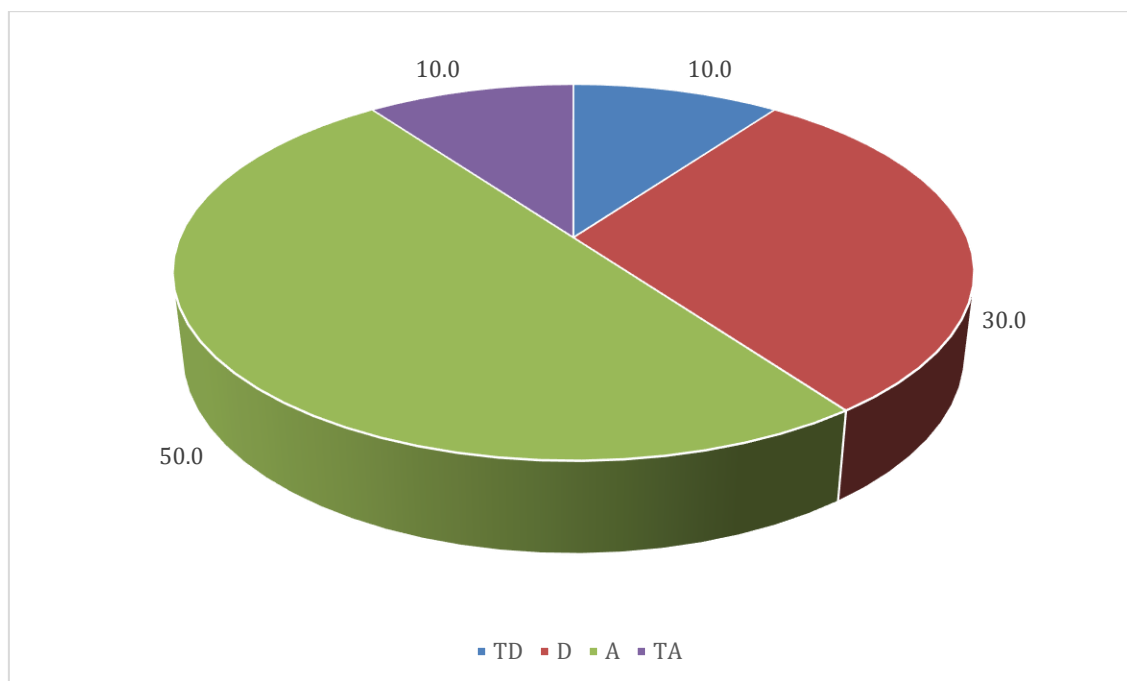
Proceso de ascenso.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	4	10.0
D	12	30.0
A	20	50.0
TA	4	10.0
Total	40	100.0

Nota: *Encuesta aplicada.*

Figura 4.

Proceso de ascenso.



Nota: Continuando con la cuarta premisa, se puede afirmar que el 50% de los expertos que respondieron la encuesta, señalan estar de acuerdo en que el proceso de ascenso garantiza íntegramente la permanencia de trabajadores de la salud idóneos para desempeñar el nuevo puesto, sin embargo existe un 10% de los expertos que señalan estar en desacuerdo con lo establecido en la interrogante.

Tabla 5

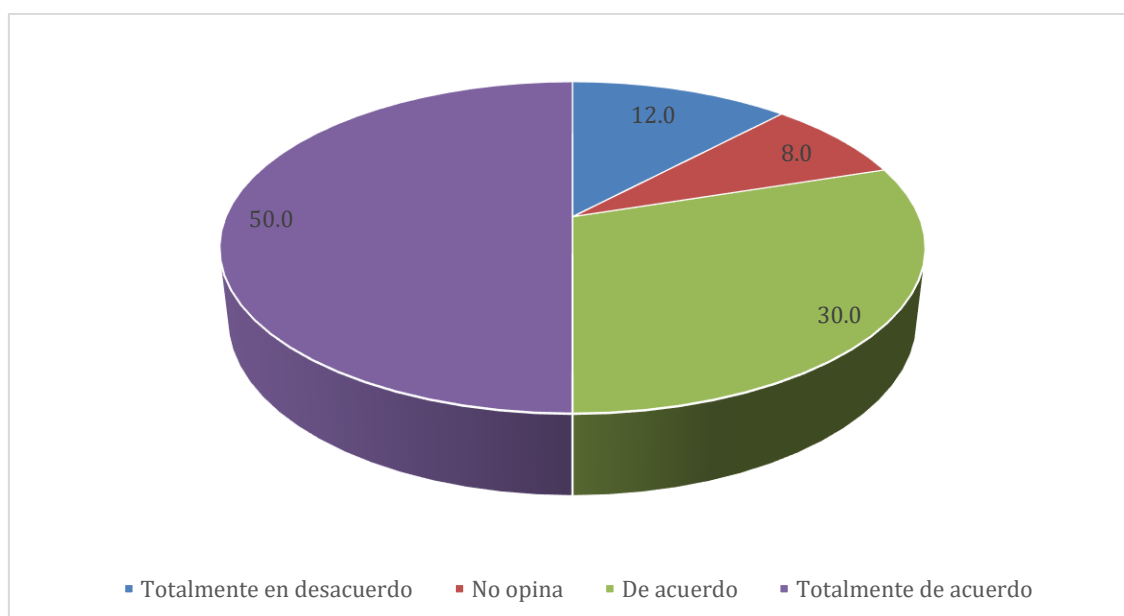
Personal de salud.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
D	5	12.5
N/O	12	30.0
A	23	57.5
Total	40	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces y Abogados especialistas en Derecho laboral y constitucional.

Figura 5.

Personal de salud.



Nota: Como penultimo resultado a ser analizar, se tiene que el 50% de los expertos consideran estar totalmente a favor respecto a que el presupuesto para el Sector Público se vería afectado con la implementación de los ascensos automáticos del personal de salud, sin embargo de forma diferente expresa el 8.0% de los encuestados, quienes prefieren no emitir opinión sobre la pregunta aplicada a su persona.

Tabla 6

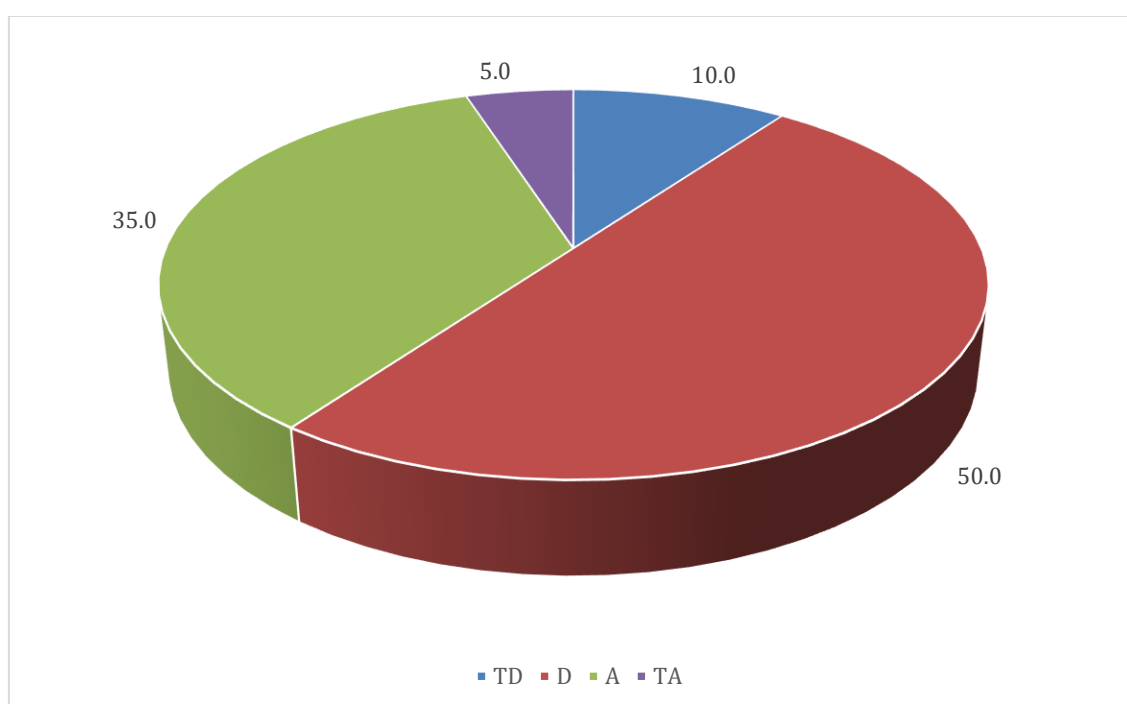
Covid-19.

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	4	10.0
D	20	50.0
A	14	35.0
TA	2	5.0
Total	40	100.0

Nota: Encuesta aplicada.

Figura 6.

Covid-19.



Nota: Por último, con el proceso de interpretación de los resultados, se tendrá en consideración al 50% de los expertos los cuales señalan estar en desacuerdo en que la labor riesgosa que tuvo el personal de salud para enfrentar el Covid-19 es mérito suficiente para ascenderlos automáticamente, sin embargo un 5.0% de los participantes señalan estar totalmente de acuerdo con la pregunta planteada.

CAPITULO IV:

CONTRASTACIÓN DE LA

HIPÓTESIS

Cumpliendo con los requisitos establecidos por la metodología utilizada, se procedió a la contrastación de los resultados, para ello se tomó en cuenta el objetivo general, el cual busca determinar la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31039, con relación al ascenso automático excepcional de los trabajadores de la salud, para ello se verificó lo obtenido en la Figura N.º 3 el cual explica que de acuerdo a la tercera premisa, se puede asegurar que 35% de los expertos que respondieron la encuesta señalan estar de acuerdo con la inconstitucionalidad la Ley N.º 31039 el cual dispone el ascenso automático excepcional por años de servicio de los trabajadores de la salud, sin embargo un 5.0% de los expertos señalan estar totalmente en desacuerdo con lo establecido en la interrogante, con respecto al presente resultado se puede afirmar que la gran mayoría de los expertos que han brindado su manifestación, señalan que al generar un ascenso automático por los años de servicio se genera una evidente vulneración a la Constitución Política del Perú, siendo así realizada la comparación, Fernández (2011), en su investigación propone: Aplicar el modelo de proceso de promoción el cual será aprobado por la Comisión Nacional de Servicios y dictar normas que regulen este sistema y promuevan el desarrollo de puestos administrativos para los servidores públicos. Es necesario desarrollar técnicas de impresión dentro de las vacantes a través de la normativa que rige el proceso y creando una red que conecte los recursos de los trabajadores que, una vez agotado el proceso de convocatoria interna, se pueda invitar a un nivel institucional a participar del proceso de selección, pues estas oportunidades de desarrollo son importantes para poder ejecutar mejor el desarrollo laboral. Con respecto a lo obtenido y lo sustentado por el autor, se puede asegurar que actualmente por motivo del covid-19 el personal médico son las personas más vulnerables ante esta

situación, sin embargo, se puede evidenciar que estas personas al no tener un contrato CAS han sido despedidos o dejado de lado una vez que se pudo ganar la lucha contra este virus que afectó mundialmente a la sociedad.

Prosiguiendo con la verificación de los resultados, se tuvo en consideración al primer objetivo específico, el cual busca identificar los problemas jurídicos – políticos que dieron lugar a la emisión de la Ley N.º 31039, para ello se observó la Figura N° 1 que; en relación a los datos obtenidos por la encuesta aplicada, se asegura que el 57.5% de los participantes (los cuales son la mayoría) señalan estar de acuerdo en que con los ascensos automáticos por años de servicio se vulnera la meritocracia, sin embargo un 17.5% de los participante prefieren reservar su opinión, es importante señalar que los ascensos son un proceso por el cual un profesional sube un escalón en la jerarquía de la organización de la entidad, sin embargo esto no significa que a causa de una pandemia como lo que sucedió por el covid-19, el personal no médico tengan que ser beneficiados automáticamente, es por esa razón que al contrastarlo con lo defendido por Beltrán (2013), en su investigación que señala lo siguiente: durante más de una década se han utilizado prácticas de contratación inconstitucionales en el Perú y peor aún, la estructura del contrato (SNP) fue denegada cuando se cambió de un contrato de gestión a un contrato de trabajo más económico, con la visión de que los empleados contratados se adhieran a los horarios de trabajo y están sujetos a presentaciones constantes sin reconocer ningún beneficio laboral; todo esto debido a restricciones financieras y gastos irrazonables impuestos por el estado. Cabe señalar que décadas atrás se han evidenciado contrataciones con el estado inconstitucionales, las cuales afectan directamente al estado incluso hasta la misma ciudadanía.

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico, el cual tiene como propósito describir los lineamientos constitucionales que dieron origen a la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31039, teniendo como respaldo a lo obtenido en la Figura N°4 el cual afirma que el 50% de los expertos que respondieron la encuesta, señalan que es conforme que el proceso de ascenso garantiza íntegramente la permanencia de trabajadores de la salud idóneos para desempeñar el nuevo puesto, sin embargo existe un 10% de los expertos que señalan estar en desacuerdo con lo establecido en la interrogante. Es de vital importancia reconocer que a través de la Ley N° 31039, se evidencia distintos derechos de los trabajadores que han sido violentados ya que a través de esta declaración se puede observar que muchos de los trabajadores sujetos a un contrato CAS no han logrado la permanencia a pesar de la labor riesgosa, asimismo al compararlo con lo sustentado por Cacho (2019), en su investigación determinaba que: La relación entre el Tribunal Constitucional autónomo y su injerencia política está llegando a su fin; por ello, nuestro máximo intérprete trabaja con instituciones procesales como “Inconstitucionalidad por Omisión” y el “Estado de Cosas Inconstitucionales”, figuras que se hacen desde el sistema autónomo de la Corte Constitucional para primar sobre un verdadero actor político, han de ser concretas o lógicas en la estructura de la reglas necesarias o política general.

Finalmente, se tomó en consideración el último objetivo específico, el cual busca analizar la figura jurídica del ascenso común y ascenso automático excepcional en la Ley n.º 31039, teniendo como respaldo lo obtenido en la Figura N° 6 que para culminar con el proceso de interpretación de los resultados, se tuvo en consideración al 50% de los expertos los cuales señalan estar en desacuerdo en

que la labor riesgosa que tuvo el personal de salud para enfrentar el Covid-19 es mérito suficiente para ascenderlos automáticamente, sin embargo un 5.0% de los participantes señalan su total conformidad con la pregunta planteada.

Se realizó la comparación con lo sustentado por Gutiérrez (2014), en su investigación donde estableció que: El nombre correcto para este sistema de revisión constitucional es "acción inconstitucional", que puede describirse como un proceso de revisión constitucional que, cuando es lanzado por una de las instituciones reguladas por la CPEUM, tiene como objetivo analizar la constitución o la inconstitucionalidad de una ley gubernamental o acuerdo internacional cuya resolución sea particularmente similar a la SCJN en caso de que se concluya que la ley o acuerdo en disputa es inconstitucional. Cabe señalar que los aspectos jurídicos que han sido presentados en la presente investigación son válidos.

CAPITULO V: CONCLUSIONES

1. Se ha logrado determinar la inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039, la cual permitía el ascenso automático excepcional de los trabajadores de la salud, ya que vulnera el principio de meritocracia y además de ello trastoca el presupuesto público anual fijado. Estos principios pretenden no solo proteger la estabilidad económica nacional, sino, además, brindar un servicio eficiente a la ciudadanía.
2. Uno de los principales problemas jurídicos que dio origen a la Emisión de la Ley N° 31039 fue la presión realizada por el personal de la salud a través de las múltiples manifestaciones. En función a ello, se emitió una ley con la finalidad de resolver el problema, sin embargo, la inobservancia de criterios esenciales de los procesos de contratación como el principio de meritocracia generaron la inconstitucionalidad de la referida ley.
3. Los lineamientos que dieron origen a la inconstitucionalidad de la Ley n.º 31039, que promueve el ascenso automático del personal de la salud fueron cuatro, en primer lugar, la vulneración del principio de meritocracia, el atentado contra el presupuesto económico, la no diferenciación entre personal administrativo que trabaja en el sector salud y personal del sector salud y por último, las insuficiencias en términos de la calidad del servicio ofrecido.
4. El ascenso común es una figura regular que es interna y cuenta con un presupuesto determinado por el estado para ocupar dichas plazas, esta promoción es natural en todas las instituciones públicas, por el contrario, el ascenso excepcional es una figura irregular que no contempla presupuesto público y mucho menos plazas para el desarrollo de la función, por lo tanto, vulnera la estabilidad económica.

CAPITULO VI:

RECOMENDACIONES

1. Al Tribunal Constitucional velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico y como tal declarar la inconstitucionalidad de la Ley que regula el ascenso automático por años de servicio.
2. Al Congreso de la República, quien debe de velar por la adecuada promulgación de leyes referidas a la modificación del presupuesto público anual y así evitar la inestabilidad económica.
3. El Ministerio de Salud debe vigilar que la contratación del personal del sector salud deba ser mediante concursos públicos teniendo como base el principio de meritocracia, a través del cual se contrate a personal idóneo de manera objetiva a efectos de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

REFERENCIAS

- Abanto, C. y Paitán, J. (2017). "Manual del Régimen Laboral Público".
Gaceta Jurídica, Lima
- Anacleto Guerrero, V. (2015). Manual del derecho del trabajo. Lex y Juris.
- Balaguer, F. (1999). "Derecho Constitucional". Madrid: Edit. Tecnos
- Beltrán, L. (2013). "Problemática de la existencia de distintos regímenes de contratación de personal en el estado", Universidad Católica del Perú,
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4508/BELTRAN_LARCO_LUISA_CONTRATACION_PERSONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bernal, B. (2010). "Historia del Derecho", México, Editorial Cultura Jurídica
- Bonifaz, J. y Martínez, J. (2016). "Reforma del servicio civil: Momento de implementación". CIES, Lima
- Cacho, K. (2019). "La inconstitucionalidad por omisión y el estado de cosas inconstitucionales, como manifestaciones de la intervención política del tribunal constitucional peruano, a través de su autonomía procesal", Universidad Nacional de Cajamarca,
<https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/2949/LA%20INCONSTITUCIONALIDAD%20POR%20OMISI%C3%93N%20Y%20EL%20ESTADO%20DE%20COSAS%20INCONSTITUCIONALES,%200COMO%20MANIFESTACIONES%20DE%20LA%20INTERVENCION%20POLITICA%20DEL%20TRIBUNAL%20CONSTITUCIONAL%20PERUANO,%20A%20TRAVES%20DE%20SU%20AUTONOMIA%20PROCESAL>

20SU%20AUTONOM%C3%8DA%20PROCESAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cámara, G. (2017). “El principio y las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. Universidad de Granada

Carpio, E. (2002). “Normas interpuestas en la acción de inconstitucionalidad (el caso peruano)”, en Domingo, García Belaunde (Co.), Constitucionalismo y derechos humanos, citado

CEPAL (1994) “Gasto público en América Latina”. En Cuadernos de la CEPAL, Santiago.

Cetrángolo, O.; Larrañaga, O.; Carciofi, R. (1996). “Desafíos de la descentralización, educación y salud en Argentina y Chile”, CEPAL, Santiago

Chanamé, R. & OTROS. (2009). “Manual de Derecho Constitucional: Derecho, Elementos e Instituciones Constitucionales”, Arequipa, Editorial ADRUS

DEJ (2020). “Diccionario panhispánico del español jurídico”, Santander, <https://dpej.rae.es/lema/inconstitucionalidad>

ELE (1999). “Principio de cooperación”, Centro Virtual Cervantes, https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/principiocooperacion.htm#:~:text=Se%20entiende%20como%20principio%20de,en%20la%20tarea%20de%20comunicarse

Expediente N.º 014-2003-AI/TC, Sentencia del Tribunal Constitucional, del 10 de diciembre del 2003.

Fernández, G. (2011). "Modelo para el proceso de ascensos del personal administrativo de las instituciones centralizadas del organismo ejecutivo comprendido dentro del sistema de servicio civil de Guatemala", Universidad de San Carlos de Guatemala, http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3854.pdf

Figuerola, E. (2014). "El proceso de inconstitucionalidad. Desarrollo, límites y retos", Universidad San Martín de Porres, https://derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_7/articulos/5_El_proceso_inconstitucionalidad.pdf

Franco, R. (1983) "Las grandes controversias de la política social". En Desarrollo Social en los 80. CEPAL-ILPES-UNICEF, Santiago

García, C. (2019). "La inconstitucionalidad de las normas constitucionales y el mecanismo para tratarlas en el ordenamiento peruano", Universidad Católica Toribio de Mogrovejo, http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2263/1/TL_GarciaLeguiaCelso.pdf

González, G. (2009). "Los Jueces. Carrera judicial y cultura jurídica". Ed. Palestra PUC. Lima

Guastini, R. (2001). "Lezioni di Teoria Costituzionale". Torino: Giappichelli editore.

Guía Jurídica (2016). “Hacienda pública”, Wolters,
https://guiasjuridicas.woltersklower.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASMTAwsTtbLUouLM_DxblwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA_9b3DTUAAAA=WKE

Gutiérrez, I. (2014). “La acción de inconstitucionalidad en México”,
Universidad de México,
<https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/247510/ticgz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hakansson, C. (2012). “Curso de Derecho Constitucional”, Lima, Palestra Editores

La Ley (2020). “Personal de salud podrá ascender de manera automática”,
La Ley, <https://laley.pe/art/10032/personal-de-salud-podra-ascender-de-manera-automatica>

Legis. (2020). TC declaró inconstitucional ascenso automático para personal de salud [STC 00011-2020-AI], <https://lpderecho.pe/poder-ejecutivo-presento-demanda-inconstitucionalidad-contraleya-ascenso-automatico-personal-salud-ley-31039/>

MEF. (2016). ¿Qué se debe entender por equilibrio presupuestario?,
Ministerio de Economía y Finanzas,
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100751&view=article&catid=647&id=5106&lang=es-ES

Ministerio de Economía y Finanzas,

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

[ES&Itemid=100751&view=article&catid=29&id=76&lang=es-ES](https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100751&view=article&catid=29&id=76&lang=es-ES)

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). Decreto Supremo N.º 238-2019-EF. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, Lima: 28 de julio del 2019.

MINSA (2022). Coronavirus (COVID-19) en Perú, Gobierno del Perú, <https://www.gob.pe/coronavirus>

Punset, R. (1995). “Normas impugnables y motivos impugnatorios en los procesos de control de constitucionalidad de las leyes”. Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid

Resolución Ministerial N.º 100-2020-MINSA, Lima: 23 de marzo del 2020, art. 1. Asimismo, véase en su anexo, el inc. c, num. 1 de las disposiciones específicas de la Directiva Sanitaria N.º 087-2020, Directiva Sanitaria para el Manejo de Cadáveres por COVID-19.

Resolución Ministerial N.º 171-2020-MINSA, Lima: 4 de abril del 2020.

Resolución Ministerial N.º 189-2020-MINSA, Lima: 13 de abril del 2020. Ministerio de Salud, Resolución Ministerial N.º 208-2020-MINSA,

Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 02018-2015-PA/TC, voto singular del magistrado Miranda Canales.

ANEXO

Encuesta: Análisis a la inconstitucionalidad de la ley n.º 31039, en relación al ascenso automático de trabajadores de la salud.

1. ¿Cree usted que con los ascensos automáticos por años de servicio se vulnera la meritocracia?
 - a. De acuerdo.
 - b. No opina.
 - c. Acuerdo.
2. ¿Considera que los ascensos automáticos de los trabajadores de la salud afectarían la calidad del servicio de salud brindado a la población?
 - a. De acuerdo.
 - b. No opina.
 - c. Acuerdo.
 - d. Totalmente de acuerdo.
3. Desde su perspectiva ¿Considera inconstitucional la Ley n.º 31039 que dispone el ascenso automático excepcional por años de servicio de los trabajadores de la salud?
 - a. Totalmente en desacuerdo
 - b. De acuerdo.
 - c. Acuerdo.
 - d. Totalmente de acuerdo.
4. ¿Está de acuerdo que el proceso de ascenso garantiza íntegramente la permanencia de trabajadores de la salud idóneos para desempeñar el nuevo puesto?
 - a. Totalmente en desacuerdo
 - b. De acuerdo.
 - c. Acuerdo.
 - d. Totalmente de acuerdo.
5. ¿Considera que el presupuesto para el Sector Público se vería afectado con la implementación de los ascensos automáticos del personal de salud?
 - a. De acuerdo.
 - b. No opina.
 - c. Acuerdo.
6. A su parecer, ¿la labor riesgosa que tuvo el personal de salud para enfrentar el covid-19 es mérito suficiente para ascenderlos automáticamente?
 - a. Totalmente en desacuerdo
 - b. De acuerdo.
 - c. Acuerdo.
 - d. Totalmente de acuerdo.